



Perspectivas socioeconómicas

Para 2025

*Un análisis desde las organizaciones
empresariales de Iberoamérica*

2025

MARZO 2025

por CEIB



2025 DESDE UNA VISIÓN EMPRESARIAL

Este 2025 viene marcado por un escenario geopolítico incierto a nivel internacional, por lo que Iberoamérica no es la excepción. Los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, junto con las crecientes tensiones comerciales lideradas por Estados Unidos, configuran un panorama complejo que exige respuestas estratégicas y adaptabilidad.

Los principales organismos internacionales proyectan un crecimiento mundial moderado, en línea con el 3,2% estimado para 2024. Se anticipa una desaceleración en China y Estados Unidos, mientras que la Eurozona podría experimentar una leve mejoría. En América Latina y el Caribe, se espera un crecimiento estable en torno al 2,5%.

Frente a este delicado contexto internacional abordamos y analizamos desde una perspectiva empresarial los principales retos y oportunidades que enfrenta la región en su camino hacia la recuperación y el crecimiento sostenible, ofreciendo una

mirada detallada de cada país, a través de las organizaciones empresariales del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE.

Y lo hacemos una vez más, no solo a través del diálogo, sino de la acción y del compromiso que tenemos con Iberoamérica, con sus empresas, con el empleo y con la formación, siendo éstas las mejores fórmulas de inclusión social que existen.

Mediante el exhaustivo análisis de nuestras organizaciones empresariales se ha podido obtener una radiografía del conjunto de la región, de sus aspiraciones, sus prioridades, los desafíos y principales obstáculos, y cómo se pueden superar en equipo, remando sector público y privado en la misma dirección.



Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2024

Obstáculos y Retos:

Panorama de las exportaciones: la reducción de las exportaciones, especialmente hacia uno de los principales socios comerciales de América Latina (Estados Unidos) representa un obstáculo significativo. Esto afecta tanto a las economías dependientes de la exportación de recursos naturales, como a los sectores industriales que abastecen al mercado estadounidense.

Baja productividad: La falta de innovación, la baja inversión en tecnología y la escasa modernización de las infraestructuras en la región impactan directamente en la productividad, lo que limita las posibilidades de crecimiento económico.

Elevada tasa de informalidad: La informalidad laboral es un desafío estructural en Iberoamérica, lo que contribuye a la inestabilidad económica y a la falta de derechos laborales y acceso a servicios sociales para una gran parte de la población. Inestabilidad global e incertidumbre: Los efectos de la crisis económica mundial, el cambio climático, la guerra en Ucrania y otros factores geopolíticos generan incertidumbre y dificultan el proceso de recuperación en la región.

Brecha de género: A pesar de los avances, sigue existiendo una marcada desigualdad de género en el acceso a empleo, educación y participación en los espacios de toma de decisiones, lo cual reduce el potencial de desarrollo económico.

Brecha digital: El acceso limitado a la tecnología y la falta de infraestructura digital adecuada en muchas zonas de América Latina impiden que la región aproveche completamente las oportunidades de la economía digital global.

Fortalezas y Ventajas Competitivas:

Jóvenes y capital humano: La región cuenta con una población joven y en crecimiento, lo que representa una ventaja estratégica si se canaliza adecuadamente hacia la educación y el empleo de calidad.

Recursos naturales: Iberoamérica es rica en recursos naturales, lo que sigue siendo una ventaja competitiva, especialmente en el contexto de la transición energética y la creciente demanda de productos sostenibles.

Potencial para la sostenibilidad y la innovación social: A pesar de las dificultades, la región tiene un enorme potencial para impulsar la innovación en sectores clave como las energías renovables, la economía circular y el turismo sostenible.

Objetivos a Corto y Medio Plazo:

Mejorar la competitividad: Aumentar la productividad y la competitividad de las economías latinoamericanas, a través de la modernización de las infraestructuras, la innovación tecnológica y la educación.

Cerrar brechas: Reducir la brecha de género, la brecha digital y mejorar la empleabilidad juvenil, lo cual requerirá una intervención en políticas públicas que promuevan la inclusión y el acceso a nuevas oportunidades.

Desarrollo de infraestructuras: La inversión en infraestructuras será crucial para facilitar el comercio, mejorar la calidad de vida y atraer inversiones extranjeras.

Diálogo y acción público-privada:

Es fundamental que las organizaciones empresariales, junto con la sociedad civil y la academia, trabajen de forma conjunta para encontrar soluciones. La colaboración público-privada será clave para superar los obstáculos y generar un entorno económico más dinámico.

Es importante también reivindicar el papel fundamental de las empresas y los empresarios como motores del crecimiento económico y el bienestar social. Para garantizar su actividad y desplegar todo su potencial se requiere un entorno de estabilidad política e institucional, de seguridad jurídica y de calidad normativa, que fomente la inversión y un clima de negocios favorable.

Conclusión:

Iberoamérica se enfrenta a grandes desafíos, pero también tiene un amplio potencial para encontrar soluciones a través de la colaboración, la innovación y la mejora en sus políticas públicas. A medida que la región avance en el fortalecimiento de sus fortalezas y el abordaje de sus debilidades, será fundamental mantener el enfoque en las prioridades de crecimiento sostenible, innovación social y competitividad.

Agradecemos la colaboración y contribución de las organizaciones empresariales de CEIB y de FIJE que han participado en este informe, y que marcan la hoja de ruta empresarial para la región.

LAS EMPRESAS, MOTOR DE PROGRESO



Antonio Garamendi

Presidente de CEOE y presidente de CEIB



Este año 2025 arranca como lo hizo el año anterior: con un entorno global complejo desde el punto de vista geopolítico, marcado por la incertidumbre y la volatilidad.

Con dos conflictos bélicos (la guerra en Ucrania provocada por la invasión de Rusia y los enfrentamientos en Oriente Próximo) con implicaciones que trascienden fronteras y que alimentan esa inestabilidad. Y con un nuevo elemento disruptivo: las crecientes tensiones comerciales por la nueva política de aranceles puesta en marcha por parte de EE UU hacia distintas economías, como México, Canadá o China. En este contexto, los principales organismos internacionales prevén un crecimiento mundial que seguirá siendo discreto, en línea con el 3,2% estimado para 2024, aunque se espera una cierta desaceleración en China y en EE UU y una ligera mejoría en la Eurozona.

En el caso de América Latina y Caribe, el crecimiento se prevé estable, en el entorno del 2,5%. Con estas tasas de crecimiento moderado y con unas presiones en los precios que se esperan menores, parece probable que los bancos centrales de las principales economías continúen rebajando sus tipos de interés.

En todo caso, este ejercicio va a tener un condicionante claro para el conjunto de las economías mundiales: la nueva Administración Trump y las decisiones, políticas y económicas que, finalmente, adopte. De momento, los anuncios del nuevo presidente de Estados Unidos tienen un claro componente inflacionista, hacen prever una guerra comercial con las principales economías que no será beneficiosa para nadie y avanzan un giro hacia posiciones proteccionistas.

Ante esta situación, en CEOE estamos analizando las medias que, finalmente, se puedan poner en marcha y sus posibles consecuencias. Se trata de un asunto muy relevante porque EE UU es un país estratégico para España, Nuestro stock inversor en el país ronda los 80.000 millones de dólares y allí operan cerca de 800 empresas que son filiales españolas. Empresas que son parte del tejido productivo estadounidense y que generan riqueza y empleos en el país (cerca de 100.000 de puestos de trabajo).

Empresa que son industria, en definitiva. Y hay que recordar que el nuevo Gobierno estadounidense ha asegurado que es un sector que va a apoyar.

En todo caso, lo fundamental en este contexto es que el conjunto de la UE y los países miembros mantengamos una actitud abierta de trabajo con EE UU, que es la primera potencia occidental y un referente para las empresas y para Europa; que sigamos trabajando para reforzar vínculos comerciales con otros socios internacionales y para diversificar mercados; y que logremos que la UE hable con un solo mensaje, poniendo en valor el espacio europeo como un mercado único con 450 millones de potenciales consumidores.

Más allá del impacto que puedan tener las nuevas políticas de EE UU, la realidad es que España cerró 2024 con un balance favorable para su economía. Así, la previsión es que el ejercicio se cierre, finalmente, con un crecimiento superior al 3% de media, significativamente por encima de una Eurozona que apenas llegó al 0,8%.

En todo caso, este buen comportamiento no debe ocultar las debilidades estructurales y los riesgos que condicionan las perspectivas que podemos tener para este 2025. Porque la buena marcha de la economía no ha sido igual ni para todos los sectores ni para las empresas de todos los tamaños y porque, además, se mantienen ámbitos de mejora clara.

El desempleo en España es todavía muy elevado en comparación con el resto de Europa, sobre todo entre los más jóvenes; contamos con unos niveles de deuda y déficit públicos que obligan a intensificar el proceso de consolidación fiscal; y la inversión empresarial se encuentra todavía muy debilitada.

En este contexto, los principales impactos negativos para nuestra economía por el lado interno pueden llegar por una política económica que introduzca una mayor incertidumbre y genere mayores costes a la actividad empresarial, sobre todo en el mercado laboral, lo que puede frenar decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos.

De hecho, este es un asunto que nos preocupa especialmente. La inversión empresarial crece de forma tímida y sigue por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia. Y el comportamiento de la inversión es clave para garantizar el crecimiento futuro y lograr mejoras de competitividad. Porque es un elemento fundamental para hacer frente a los retos de la doble transición digital y de sostenibilidad en la que ya estamos inmersos y a los bajos niveles de productividad de nuestra economía.

En general, creo que este es un reto que compartimos tanto la economía española como las de América Latina y Caribe: la necesidad de contar con un entorno que favorezca la confianza y la certidumbre, la libertad de empresa, la unidad de mercado, la seguridad jurídica y regulatoria. Y que no se caracterice por unas cargas fiscales elevadas y cambiantes y unos costes laborales crecientes.

Sólo de esta manera será posible que las empresas inviertan de manera decidida. Se trata, en última instancia, de fortalecer los factores de crecimiento de nuestras economías. Y, entre ellos, la inversión se configura como pilar esencial.

Como también lo son el capital humano o las infraestructuras. El primero es decisivo para la captación y el aprovechamiento de las inversiones. La formación y la adaptación y actualización a las nuevas necesidades del mercado laboral son esenciales para seguir logrando mejoras de productividad, mayores inversiones y, en definitiva, más progreso.

Por su parte, la mejora de las infraestructuras es un revulsivo para acelerar el crecimiento económico y para impulsar la vertebración de las regiones y territorios de cada país.

A estos elementos hay que añadir, también, medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica. Porque sin estabilidad de precios y sin estabilidad presupuestaria y financiera no es posible un crecimiento económico sostenido que permita mejorar el bienestar del conjunto de los ciudadanos.

O medidas que avancen hacia un sistema fiscal más moderno, competitivo y eficiente; hacia la supresión de barreras y cargas burocráticas; hacia una gestión más eficiente del gasto público; o hacia una mayor colaboración público-privada.

En definitiva, si queremos seguir creciendo de manera sostenida y robusta, de lo que se trata es de contar con un marco que favorezca la actividad, que permita que el sector privado pueda desarrollar todo su potencial para generar riqueza, crear empleo y ganar en competitividad.

Desde CEOE insistimos en reivindicar el valor de la empresa y los empresarios para que la economía crezca y para poder superar con éxito los desafíos que se nos presentan. El dinamismo empresarial es el motor del avance de un país, de la apertura de oportunidades y del mantenimiento del bienestar del conjunto de la sociedad. Sin la contribución de las empresas, no es posible el progreso ni la modernización del país. Por eso, desde CEOE seguiremos defendiendo el papel de la empresa como generadora de riqueza y empleo, como motor de cambio y bienestar social. Y vamos a seguir trabajando por un entorno de estabilidad política e institucional y de calidad normativa que genere un clima favorable para la inversión y la actividad empresarial.

O PACTO NECESSÁRIO PARA O CRESCIMENTO DO BRASIL



Ricardo Alban

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)



Nos primeiros meses de 2024, a atividade econômica brasileira surpreendeu ao exibir um dinamismo maior do que o previsto. Havia, inclusive, sinais inequívocos de solidez em áreas-chave, como a indústria de transformação, que começou a colher benefícios de uma nova orientação de política industrial – a chamada Nova Indústria Brasil (NIB).

O apoio a segmentos como o automotivo, o alimentício, a construção civil e o farmacêutico, entre outros, colaborou para o fortalecimento do mercado de trabalho, o aumento de receitas fiscais e o surgimento de uma perspectiva de maior competitividade internacional.

A inflação, que até então se mantivera em patamar aceitável, chegou a registrar deflação em agosto, alimentando a sensação de que a economia poderia encerrar o ano em terreno positivo, mesmo diante da contribuição menos favorável do agronegócio.

A partir do fim do segundo semestre de 2024, entretanto, o clima de otimismo passou a dividir espaço com preocupações mais profundas sobre o horizonte de 2025.

Enquanto a inflação se mantinha, em grande parte, controlada, outros indicadores traziam apreensão: o dólar começou a apresentar trajetória ascendente, a taxa básica de juros (Selic) deu sinais de alta e o mercado financeiro parecia cada vez mais cético quanto à capacidade de o país equilibrar suas contas públicas em curto prazo.

O Brasil, que vinha de um hiato de baixo crescimento médio (0,5% ao ano entre 2012 e 2021), havia conseguido elevar a expansão econômica para cerca de 3% ao ano no triênio mais recente, inserindo o país entre as 6 economias que mais cresceram no G20.

Contudo, a elevação dos juros e a volatilidade cambial podem desencadear consequências adversas para investimentos produtivos e afetar a competitividade da indústria nacional – justamente o segmento que melhor irrigava o conjunto das atividades econômicas.

Em paralelo, o déficit fiscal projetado para 2024 estava estimado em aproximadamente 0,18% do PIB, número que, embora não alarmante em si mesmo, acendeu debates sobre o risco de agravamento no ano seguinte.

Para 2025, as expectativas indicavam uma elevação para a faixa de 0,4% do PIB, superando a banda de tolerância inicialmente pretendida de 0,25%.

Esse salto exigiria um contingenciamento de recursos públicos e um alinhamento de esforços de todas as esferas de poder para impedir que o desequilíbrio fiscal se transformasse em um entrave mais duradouro ao crescimento.

Afinal, a manutenção de juros altos não só encarece o serviço da dívida – cada ponto percentual de acréscimo na Selic adiciona algo em torno de R\$ 50 bilhões por ano aos gastos do governo – mas também arrefece os ânimos de quem pretende investir e gerar emprego no país.

Caso os juros sofram aumentos significativos de 2024 para 2025, o desembolso adicional, que poderia ultrapassar os R\$ 150 bilhões anuais, anularia em grande medida os ganhos obtidos com as recentes iniciativas de ajuste aprovadas no Congresso.

Não é possível dissociar esse cenário do comportamento do câmbio. A escalada do dólar pressiona fortemente os custos de produção no mercado interno, pois boa parte dos insumos – sobretudo na indústria de transformação – é importada.

Se, por um lado, a desvalorização cambial pode beneficiar alguns exportadores, por outro encarece maquinários e componentes essenciais, potencialmente elevando preços finais ao consumidor e limitando a capacidade de inovação de empresas que dependem de bens de capital estrangeiros. O debate sobre o rumo da política fiscal e monetária acentuou-se justamente porque, apesar de as medidas de corte de despesas propostas pelo Executivo terem sido aprovadas no Legislativo, a magnitude da contenção (próxima a R\$ 70 bilhões em dois anos) não elimina, sozinha, a necessidade de um pacto mais abrangente.

A convergência entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Judiciário, somada à participação dos governos estaduais e municipais, configuraria um passo fundamental para a mitigação de riscos, pois envolveria regras claras de responsabilidade fiscal associadas a estímulos para setores estratégicos, como a indústria e o agronegócio.

potencialmente elevando preços finais ao consumidor e limitando a capacidade de inovação de empresas que dependem de bens de capital estrangeiros. O debate sobre o rumo da política fiscal e monetária acentuou-se justamente porque, apesar de as medidas de corte de despesas propostas pelo Executivo terem sido aprovadas no Legislativo, a magnitude da contenção (próxima a R\$ 70 bilhões em dois anos) não elimina, sozinha, a necessidade de um pacto mais abrangente.

A convergência entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Judiciário, somada à participação dos governos estaduais e municipais, configuraria um passo fundamental para a mitigação de riscos, pois envolveria regras claras de responsabilidade fiscal associadas a estímulos para setores estratégicos, como a indústria e o agronegócio.

Esse pacto adquire centralidade quando se considera o passado recente do Brasil: o país passou longos anos com crescimento praticamente estagnado, mas apresentou, nos últimos tempos, sinais de que poderia acelerar e ingressar em um ciclo de prosperidade mais consistente.

A indústria de transformação, amparada pela Nova Indústria Brasil, demonstrou capacidade de expandir empregos de qualidade, atrair capitais para infraestrutura e aumentar a arrecadação tributária. Ao transbordar benefícios a outros setores, seu bom desempenho evidenciou a importância de se manter um ambiente macroeconômico equilibrado.

Contudo, o risco de que a política monetária restritiva e a alta do dólar sufoquem o ímpeto industrial e agrário em 2025 é real.

Embora seja provável que o agronegócio retome algum crescimento (após um período de resultados menos expressivos), a exigência de estabilidade cambial, de juros mais baixos e de disciplina orçamentária não pode ser negligenciada.

Sem um direcionamento claro que una os setores público e privado, o país corre o risco de perder os ganhos recentes e mergulhar novamente em um cenário de instabilidade e baixo crescimento.

É nesse contexto que surge a proposta de um “pacto nacional” que envolva todos os Poderes, os empresários e os trabalhadores.

Em essência, trata-se de criar um consenso em torno de metas fiscais e de políticas econômicas estruturantes, garantindo que, enquanto se busca o equilíbrio das contas públicas, haja também estímulos seletivos que assegurem a continuidade dos investimentos.

A indústria, motor do crescimento nacional, já se declarou disposta a ocupar seu lugar nessa mesa de negociação, mas precisa de garantias mínimas de que os juros não subam a ponto de sufocar projetos de modernização e expansão.

Caso seja efetivado já nos primeiros meses de 2025, esse movimento de convergência poderá neutralizar o nervosismo do mercado, estabilizar o câmbio em um patamar compatível com a competitividade externa e, sobretudo, evitar que a manutenção de juros elevados torne a dívida pública ainda mais onerosa.

Em vez de travar o crescimento, a disciplina fiscal poderia vir acompanhada de medidas de incentivo à inovação, à infraestrutura, à educação e à tecnologia, garantindo uma elevação do PIB no médio e longo prazo- gradual, porém sustentada.

No fim das contas, a experiência brasileira sugere que, quando há um consenso mínimo entre governo, setor privado e sociedade civil, o ambiente econômico se torna mais resiliente a choques internos e externos.

A economia, que vinha crescendo a taxas muito baixas no passado recente, conseguiu avanços significativos no triênio anterior justamente porque as condições de mercado e a condução de políticas setoriais favoreceram a indústria de transformação e a retomada da confiança interna.

Não se trata de retomar um modelo estatizante ou de abandonar o ajuste fiscal, mas sim de encontrar um ponto de equilíbrio em que a responsabilidade orçamentária coexista com a promoção do desenvolvimento. Portanto, o desafio imediato consiste em harmonizar políticas monetárias e fiscais de forma a não inviabilizar as conquistas alcançadas pela indústria até meados de 2024.

Ainda que com desequilíbrios setoriais, emergia desse período um país capaz de crescer. Agora, o objetivo deve ser reforçar essa capacidade, corrigir vulnerabilidades e seguir avançando de maneira sólida e sustentável.

O grau de sucesso nessa empreitada depende, em larga medida, de uma coordenação efetiva: todos os níveis de governo, o setor produtivo e a força de trabalho precisam se unir num esforço consensual para dissipar expectativas negativas e imprimir ao país um novo ciclo de expansão inclusiva e duradoura.

Esse é um passo fundamental e que precisa ser dado já no início do ano, de forma a garantir um ponto de inflexão rumo a um fluxo de crescimento sustentado, que se espraie por todos os setores produtivos do país.



SECTOR PRIVADO CHILENO: ALIADO DEL DESARROLLO AHORA Y SIEMPRE



Susana Jiménez Schuster

Presidenta de la Confederación de la Producción
y del Comercio de Chile -CPC



Los últimos 40 años Chile se ha caracterizado por una reconocida trayectoria en su camino hacia el desarrollo, con un fuerte dinamismo económico, políticas públicas responsables e instituciones robustas.

El amplio consenso en torno a la economía social de mercado y la democracia estable, permitió a nuestro país grandes logros económicos y sociales entre 1990 y 2020: durante este período multiplicamos por 5 nuestro ingreso per cápita. Redujimos la pobreza de más del 60% a menos del 10%, lo que permitió que casi 8 millones de chilenos superaran la pobreza y que surgiera una amplia y diversa clase media. También aumentamos significativamente la expectativa de vida, redujimos fuertemente la mortalidad infantil y aumentamos la cobertura, calidad y acceso a la educación en todos sus niveles, pasando de 100 mil a 1,2 millones de estudiantes en la Educación Superior.

El sector privado chileno jugó un rol crucial al dinamizar la economía, generar empleo y reducir la pobreza. En esa economía abierta, con instituciones sólidas y libertad para emprender, los empresarios asumimos el reto de competir con el mundo: plantamos árboles, cultivamos los campos, criamos salmones, expandimos la minería, construimos puentes y carreteras, desarrollamos el mercado de capitales, modernizamos el comercio, financiamos viviendas, colegios y hospitales, sacamos a millones de chilenos de la pobreza. A pesar de las dificultades que hoy atraviesa nuestra economía, marcada por un proceso de desaceleración en la última década, la actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas siguen siendo los grandes motores del crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo en Chile.

De hecho, las empresas aportan más del 80% del PIB nacional y el sector privado genera el 80% del empleo, con todo el círculo virtuoso que ello trae para los chilenos y sus familias. Son también las empresas de todos los tamaños las que financian en más de un 40% al Estado aportándole los recursos para realizar los programas sociales que necesitan distintos grupos de la sociedad.

Casi 6 millones de chilenos y chilenas trabajan en empresas del sector privado y son ellos quienes mueven al país hacia el desarrollo. Si bien el desarrollo económico ha traído inmensos beneficios a la mayoría de los habitantes, ello no significa desconocer las carencias que siguen afectando a muchas familias chilenas. Por lo mismo, volver a crecer a tasas altas y de manera sostenida es fundamental. Porque a la luz de la evidencia, una cosa es indiscutible: ningún país ha alcanzado el desarrollo sin crecimiento económico.

Y aquí los datos nos ponen una luz de alerta. Desde 2014 el crecimiento anual promedio ha sido muy bajo en comparación al crecimiento histórico de Chile. Entre 1986 y 2013 crecimos 5,6% anual, mientras que entre 2014 y 2024 el promedio fue de 1,9% anual. Y seguirá siendo muy bajo por los próximos años: el crecimiento tendencial del PIB total es 1,8% para el período 2025-2034.

¿Qué pasó que la economía chilena comenzó a desacelerarse y hoy está creciendo a tasas de sólo 2% anual?

Obviamente es un proceso que obedece a múltiples causas, pero entre las principales podemos señalar que parte importante del crecimiento se debía al aumento de la productividad y las ganancias de productividad se empezaron a agotar. A ello se sumó una serie de malas reformas en materia tributaria, laboral y del sistema electoral, ocurridas a partir de 2014. Luego vinieron el estallido social y la pandemia con sus desafortunados efectos.

Tuvimos que enfrentar dos intentos fallidos de procesos constitucionales y, en paralelo, comenzaron a diseñarse nuevas reformas económicas y sociales refundacionales, las principales, en materia tributaria y de pensiones. Los últimos años, además, hemos enfrentado un aumento de la violencia y delincuencia. Todo ello ha traído como consecuencia la falta de inversión, factor clave para crecer y generar empleo. El mercado laboral mantiene una tasa de desempleo promedio por encima de 8%. El costo de la mano de obra se ha ido elevando por encima de los aumentos de productividad, por el aumento del salario mínimo y la disminución de la jornada laboral. Por otra parte, la informalidad de la economía -y del mercado laboral en particular- ha ido al alza, precarizando la situación de aquellos trabajadores que no cuentan con seguridad social.

Adicionalmente, la falta de crecimiento económico paulatinamente ha ido erosionando los ingresos fiscales, lo que sumado al aumento del gasto, ha terminado por afectar la sanidad de las cuentas fiscales, alcanzando déficits fiscales sostenidos y un crecimiento acelerado de la deuda pública, todo lo cual complica el poder cumplir las promesas de ayudas sociales efectuadas por los últimos gobiernos.

Pero la buena noticia es que hoy la mayoría de los actores sociales y políticos en Chile ha tomado conciencia de la situación y podríamos decir que ahora existe un amplio consenso en torno a la importancia del crecimiento económico como factor indispensable para solucionar los problemas pendientes y las necesidades de la ciudadanía.

Así, aquellas reformas refundacionales -como la tributaria y de pensiones- que en un comienzo propiciaba el actual gobierno han ido moderándose y se han sumado también otras iniciativas que buscan facilitar el proceso de reimpulso económico. Incluso la última semana de enero, el Congreso Nacional aprobó una reforma al sistema de pensiones chileno, lo cual constituye un hito importante en materia previsional, por cuanto permitirá aumentar las pensiones actuales y futuras de los jubilados, gracias al acuerdo entre los distintos sectores políticos.

Es destacable que la nueva ley busca aumentar el ahorro subiendo la cotización que se destina a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores.

Se mantiene así el sistema que ha demostrado ser efectivo a la hora de resguardar y multiplicar el ahorro, junto con darle más profundidad al mercado de capitales. Pero más allá de esta reforma que esperamos sea implementada con la mayor responsabilidad, es indispensable que como país nos enfoquemos en volver a crecer, crear más empleos y oportunidades para las personas. Esa es la prioridad hoy. Y para crecer, se requieren ciertas condiciones habilitantes básicas:

- Más seguridad, porque sin seguridad no hay inversión ni desarrollo posible.
- Certeza jurídica, de manera de contar con sistemas de permisos y regulaciones ágiles y simples, que no constituyan trabas a la inversión ni ahuyentes a los inversionistas. Hoy se avanza en un buen proyecto de facilitación de permisos sectoriales, que va en esta línea.

- Competitividad tributaria, es decir, un sistema tributario que promueva el ahorro, la inversión y el desarrollo de las empresas, y que ofrezca condiciones a los inversionistas que nos haga más elegibles a la hora de decidir dónde realizar sus proyectos. En este contexto, reducir los impuestos corporativos a niveles comparables a los de los países de la OECD iría en la dirección correcta para favorecer el proceso de inversión.
- Un mejor Estado. Los países desarrollados se caracterizan por tener un Estado moderno, eficiente, ágil, que permita al sector privado desplegar todo su potencial e incentive el emprendimiento.

Más allá de estas cuatro condiciones elementales, hay otros factores complementarios. Para enfrentar los desafíos de competitividad y productividad, es necesario contar con el capital humano apropiado, lo que implica ponernos al día en materia de formación y educación desde la primera infancia hasta la adultez.

En la CPC entendemos que en esta tarea las empresas tenemos un rol importante, y es en la formación técnico-profesional donde naturalmente se produce el vínculo entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, de la mano de la transformación digital y la inteligencia artificial, que tanto pueden potenciar las habilidades de los trabajadores.

Asimismo, retomar el dinamismo en materia de concesiones es un camino que no se debe dejar de lado, ya que el país requiere de infraestructura, sobre todo en regiones.

En tanto, avanzar en fortalecer la institucionalidad fiscal es clave para efecto de asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales y de la deuda pública, y con ello financiar mayores ayudas sociales a la población en forma permanente.

Finalmente, y para lograr lo anterior, es clave contar con un sistema político que dé gobernabilidad, generando los incentivos que permitan aprobar en los tiempos adecuados buenas políticas públicas, que favorezcan la inversión, el empleo y el crecimiento.

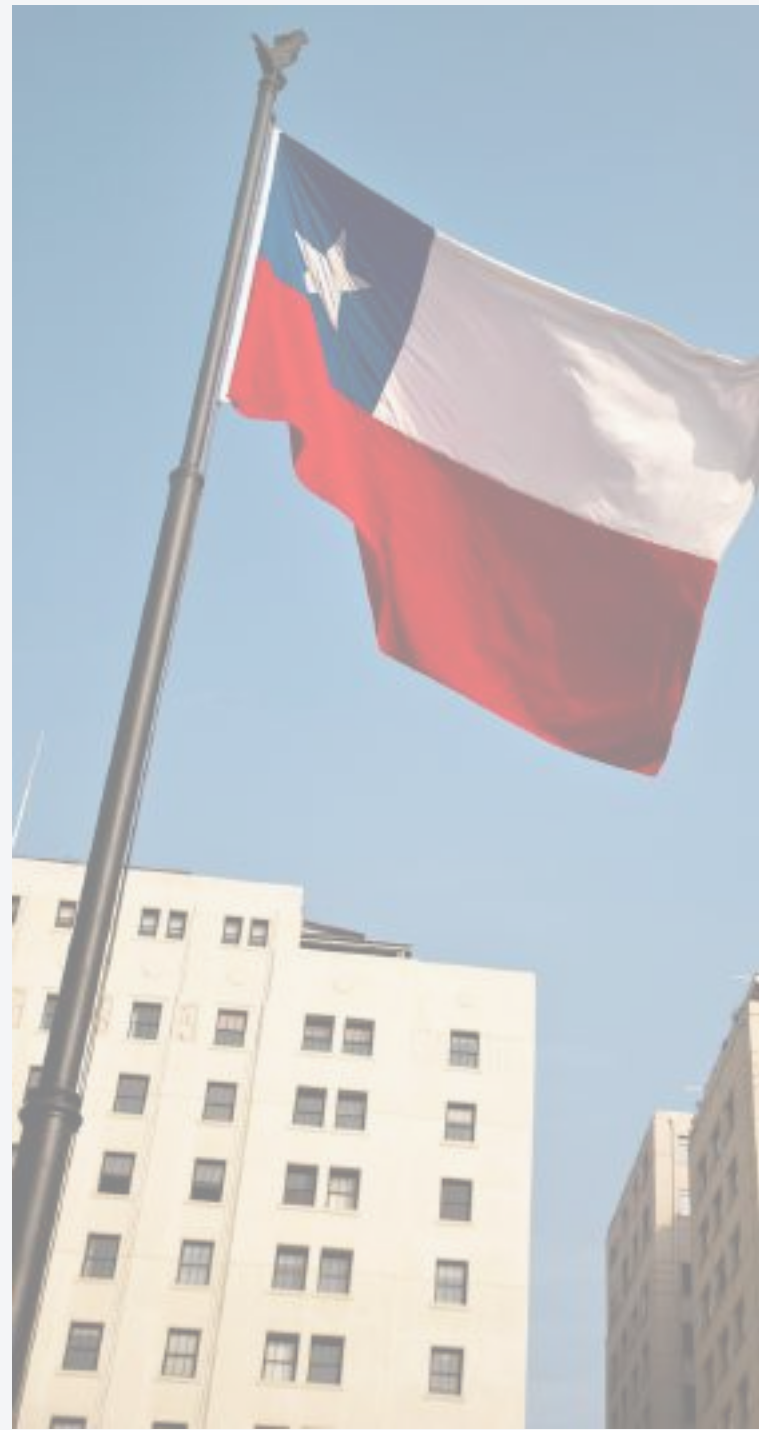
Estamos convencidos que si avanzamos en estos propósitos, nuestro país podrá aprovechar a cabalidad las tremendas oportunidades que hoy se nos presentan dadas las tendencias mundiales en materia de acción climática y transición energética, que permiten prever la demanda por soluciones más eficientes y amigables con el medio ambiente, en que Chile presenta ventajas comparativas únicas.

Por un lado, tenemos un gran potencial en energía solar y eólica, y nuestros abundantes recursos naturales nos permiten ser un proveedor a nivel mundial de minerales críticos para la transición energética, como son el litio, el cobalto, las tierras raras y el cobre, todos los cuales enfrentarán aumentos de demanda considerables. Adicionalmente, asomamos como un país clave en el desarrollo del hidrógeno verde.

Sin duda tenemos grandes retos por delante. Por ello, las empresas de todos los tamaños, de todas las regiones de Chile, de cada uno de los sectores productivos y de servicios, los innovadores y emprendedores, estamos unidos enfrentando juntos las oportunidades que se nos presentan.

Porque cuando un país vive desafíos tan importantes como los nuestros, sabemos que ningún avance ni resultado es posible si no los enfrentamos colaborando todos en torno a un mismo fin.

Solo en unidad podremos diseñar buenas políticas públicas y solo con confianza podremos alcanzar acuerdos que impacten positivamente a todos los habitantes de nuestro país.



BALANCE 2024 Y PERSPECTIVAS 2025 - ANDI

Urge retomar la agenda de desarrollo de largo plazo



Bruce Mac Master

Presidente de la ANDI



2024 fue complejo, lleno de contrastes, incierto y con grandes retos para el país, las empresas, los hogares y la sociedad en general. Aunque el año termina con una leve recuperación, que es positiva, seguimos muy por debajo de nuestro potencial; el mayor logro fue controlar la inflación llevándola a niveles del 5%. Económicamente, la mayor preocupación está en el tema fiscal, con un déficit alto, el gasto desbordado, baja ejecución, un presupuesto que no responde a la realidad económica, una deuda en ascenso y el riesgo latente de no cumplir con la regla fiscal. Por esto, los mercados mantienen alta volatilidad.

Terminamos el año con la noticia del aumento del salario mínimo, por decreto, del 9.54%, en el agregado (salario más subsidio de transporte) alcanza un crecimiento del 11%. Se espera que inflación del 2024 sea aproximadamente del 5% y la meta del 2025 sea del 5% estamos hablando de un aumento que supera el 120% la inflación este año y el 266% la inflación del año entrante. Preocupa el efecto sobre la informalidad laboral, el empleo, la inflación y las finanzas públicas. Este incremento traerá una presión adicional de 2.5 billones adicionales al déficit fiscal del gobierno nacional.

Internacionalmente persisten tensiones geopolíticas y geoeconómicas. Escalamiento de tensiones entre países, intensas jornadas electorales, debilitamiento de la globalización, reconfiguración del comercio mundial a bloques económicos y la IA aumentando su relevancia. Desde la Segunda Guerra Mundial no se registraban tantos conflictos como hoy (59 vigentes). Al tiempo que el 2025 estará influenciado especialmente por la llegada de administración de Trump, que ya ha hablado de aranceles, Panamá, Groenlandia, Israel o de condicionar el apoyo armamentístico de EEUU a Ucrania.

Mientras los países emergentes asiáticos crecen por encima del 5%, América Latina crece alrededor del 2% y la zona euro apenas llega al 1%. El 2024 también fue de grandes retos para Colombia. Una de las consecuencias es la pérdida de confianza, baja dinámica de la inversión y una deuda pública tiene que asumir mayores costos, lo que afecta negativamente las finanzas públicas por causas atribuibles a la equivocada estrategia de crear incertidumbre del gobierno.

Hace unos años los costos de la deuda colombiana eran de los menores de la región, hoy están entre los más altos. Las finanzas públicas dejan grandes interrogantes: ¿está el gobierno construyendo el presupuesto reconociendo las limitaciones de recursos que tienen la economía? ¿cumpliremos la regla fiscal en 2024 y 2025? ¿cuál es el tamaño del Estado que soporta Colombia? ¿Cómo se implementará la reforma del SGP?. Es indispensable retomar la sostenibilidad fiscal como objetivo principal de la política pública; especialmente buscando la ampliación de la base de contribuyentes y la eficiencia y austeridad en el gasto, tema sobre el cual hay muchos interrogantes.

En materia de crecimiento para Colombia, el 2024 fue de moderada recuperación: pasamos de una tasa del 0.6% en 2023 a un crecimiento que en 2024 probablemente termine alrededor del 1.9%. Sin duda positivo. Sin embargo, resulta insuficiente: esas tasas de crecimiento no producen riqueza ni desarrollo; no se logra impactar todos los sectores económicos; la inversión sigue rezagada y perdemos nuestra posición de liderazgo entre las economías emergentes y en la región.

En 2024 los sectores más dinámicos fueron: entretenimiento, agropecuario y administración pública. A propósito, el sector de servicios tiene poca información desagregada. Es importante que el país conozca a profundidad nuevas actividades que se están desarrollando, que se desagreguen, que identifiquemos las exportaciones y la contribución del sector a la balanza comercial y el empleo generado. En 2024, continuaron en terreno negativo la minería, industria y telecomunicaciones. El sector minero-energético que durante años fue gran motor de la economía, se ha rezagado con grandes efectos en menores recaudos, un menor flujo de divisas y un serio impacto sobre el suministro y seguridad en materia energética. Es urgente que Colombia reasuma su estrategia de abastecimiento energético confiable y competitivo. En industria, en este año llegamos a 24 meses consecutivos con tasas negativas en producción y ventas. Se requiere de la política de reindustrialización que anunció el Gobierno no ejecutada a hoy. La construcción empieza a mostrar tasas positivas tras dos años críticos, explicado fundamentalmente por infraestructura, dentro de la cual la obra más representativa es el Metro de Bogotá, seguida por los sistemas de transporte masivo. Edificación de vivienda, se mantiene con caídas de dos dígitos en licencias, iniciación de obras y los insumos para esta actividad también se ven impactados. Las perspectivas de este sector son preocupantes, teniendo en cuenta que toda la cadena industrial se ve afectada y enfrentando el inexplicable anuncio del Gobierno que suspenden los subsidios para "Mi casa ya".

La mayor preocupación desde la demanda está en la inversión productiva, la cual registró tasas negativas durante 5 trimestres consecutivos y solamente en los últimos meses empieza a revertirse. La productividad de la economía y del trabajo solo se aumentan con significativos crecimientos en la inversión.

Más allá de las diferencias políticas de corto plazo es indispensable retomar una ambiciosa estrategia de mediano y largo plazo que vaya más allá de una reactivación, que piense en el desarrollo del país y nos dé una visión de futuro trascendiendo los gobiernos y que realmente nos inserte en la economía global.

Es tiempo de dinamizar las agendas de largo plazo, el desarrollo requiere de trabajar con visión. En este nuevo escenario, Colombia debe explorar una estrategia que le permita posicionarse mejor en el nuevo mundo comercial. La competitividad debe ser parte de nuestra agenda, también lo debe ser una estrategia de crecimiento de largo plazo y evaluar reformas estructurales que realmente resuelvan los problemas del país y nos proyecten al futuro.

El bajo crecimiento impacta el mercado laboral. Si bien se generaron algunos puestos de trabajo, la creación de empleo se ha desacelerado y la tasa de informalidad lleva a que 6 de cada 10 trabajadores colombianos estén en la informalidad. La seguridad es gran preocupación de los hogares, empresas y la actividad económica en general. Diferentes indicadores, detectan un aumento en homicidios, extorsiones, enfrentamientos entre grupos armados.

También son cada vez más frecuentes los temas asociados a la ciberseguridad. La forma como el Gobierno ha tramitado las reformas legislativas ha sido fuente de inmensa incertidumbre y zozobra. Maximalistas, desproporcionadas, no planificadas, sin evaluación de impacto, con costos desconocidos para el Estado, los ciudadanos y las empresas. Reformas basadas en la idea de aumentar la presencia del Estado en la economía, de cambiar radicalmente los sistemas construidos, donde los análisis técnicos no son válidos porque son una representación pseudocientífica del neoliberalismo. Esto acaba cualquier posibilidad de tomar decisiones basadas en análisis profundo. Reformas tramitadas en el congreso sin debate real por parte de la maquinaria clientelista, con fuertes rumores de corrupción.

Esto ha conducido a que en este momento una muy buena parte de la economía haya estado casi tres años frente a inmensa incertidumbre tributaria, fiscal, energética, de salud, de inversión, laboral y hasta política. Atención especial merece el sector salud. Es verdad que hay inmensa preocupación por la reforma, que no aborda los problemas de falta de financiación y complejidad operativa del sistema, pero antes de cualquier discusión de reforma, es de vital importancia estabilizar la operación corriente del sistema y garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos en salud de los colombianos, pues ninguna cadena de prestación de servicios y proveeduría de tecnologías en salud puede operar bajo una situación de déficit recurrente.

ECUADOR 2025: DE LA INCERTIDUMBRE A LA REACTIVACIÓN



Juan Carlos Navarro

Presidente de la Confederación de Industrias de Guayaquil-CIG



Con base en los resultados oficiales del PIB hasta septiembre de 2024 y considerando otros indicadores macroeconómicos, como el desempeño de las ventas, se estima que el año habría cerrado con una contracción de entre el 2,2% y el 2,4%. (Ver cuadro No. 1).

Cuadro No. 1

Ecuador: Ventas totales (en millones de dólares)			Ecuador: PIB (USD millones, constantes)			Ecuador: Energía consumida (GWh, clientes regulados)		
Año	Monto	% anual	Año	Monto	% anual	Año	Monto	% anual
2014	189.632	8,2%	2014	106.652	4,1%	2014	56.742	7,8%
2015	177.227	-6,6%	2015	101.071	-5,1%	2015	13.960	5,5%
2016	165.151	-6,8%	2016	106.175	-0,7%	2016	18.943	-0,2%
2017	178.274	7,9%	2017	106.268	0,0%	2017	19.897	2,0%
2018	188.843	5,9%	2018	107.479	1,0%	2018	19.428	2,9%
2019	192.249	1,8%	2019	107.057	-0,3%	2019	20.001	2,4%
2020	165.399	-15,0%	2020	97.704	-9,1%	2020	20.480	-1,0%
2021	180.288	12,6%	2021	106.909	9,4%	2021	20.095	5,7%
2022	229.555	14,6%	2022	111.183	5,9%	2022	21.248	4,1%
2023	238.390	3,8%	2023	115.434	2,0%	2023	22.111	6,0%
2024*	211.070	-7,3%	2024*	84.832	-2,1%	2024*	21.746	-1,8%
*estimación			*estimación			*estimación		

El 2024 fue un año de amplios desafíos para la actividad económica, especialmente en lo local, particularmente por la problemática de inseguridad y la crisis energética, más otros factores provenientes de años previos, entre los que destacan el lento crecimiento del mercado laboral, los bajos niveles de inversión, y una tendencia a la baja en las importaciones destinadas a actividades productivas.

Crisis energética

Aunque en abril de 2024 se registró una crisis energética – precedida por otra entre octubre y diciembre de 2023–, fue en el último trimestre del año cuando el impacto en el desempeño productivo y económico se hizo más significativo.

Esto se debió a la mayor duración y alcance de los cortes de energía durante esos meses.

Crisis de seguridad

En Ecuador, la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes debido a la expansión del crimen organizado y la creciente influencia de los cárteles internacionales. Estas organizaciones han consolidado su poder, dominando no solo calles y barrios, sino también cárceles y puertos estratégicos, lo que les permite facilitar el tráfico de drogas y armas. Como resultado, el número de muertes violentas ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En 2022, Ecuador registró 4.500 homicidios, una cifra récord en su momento. Sin embargo, en 2023, la cifra superó las 7.000 muertes, y todo indica que 2024 fue aún más violento (Ver Gráfico 1).



Crisis económica

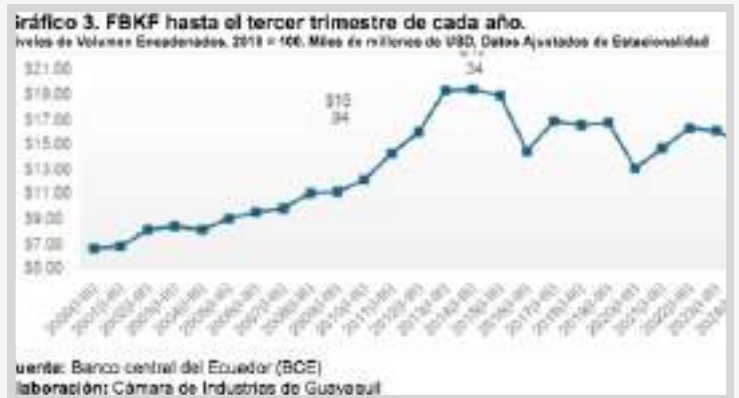
Tanto la crisis energética como la de seguridad han impactado negativamente en la economía ecuatoriana. A esto se suman la disrupción en la producción petrolera y el aumento de la incertidumbre política en un año electoral.

Como se observa en el Gráfico 2, al comparar el desempeño económico hasta el tercer trimestre de cada año, en 2024 el PIB muestra una disminución respecto a 2023, acercándose a niveles similares a los de 2022. Estos datos sugieren que las proyecciones de un ligero crecimiento económico, tanto del Banco Central del Ecuador como de organismos internacionales, fueron excesivamente optimistas frente a la realidad nacional.



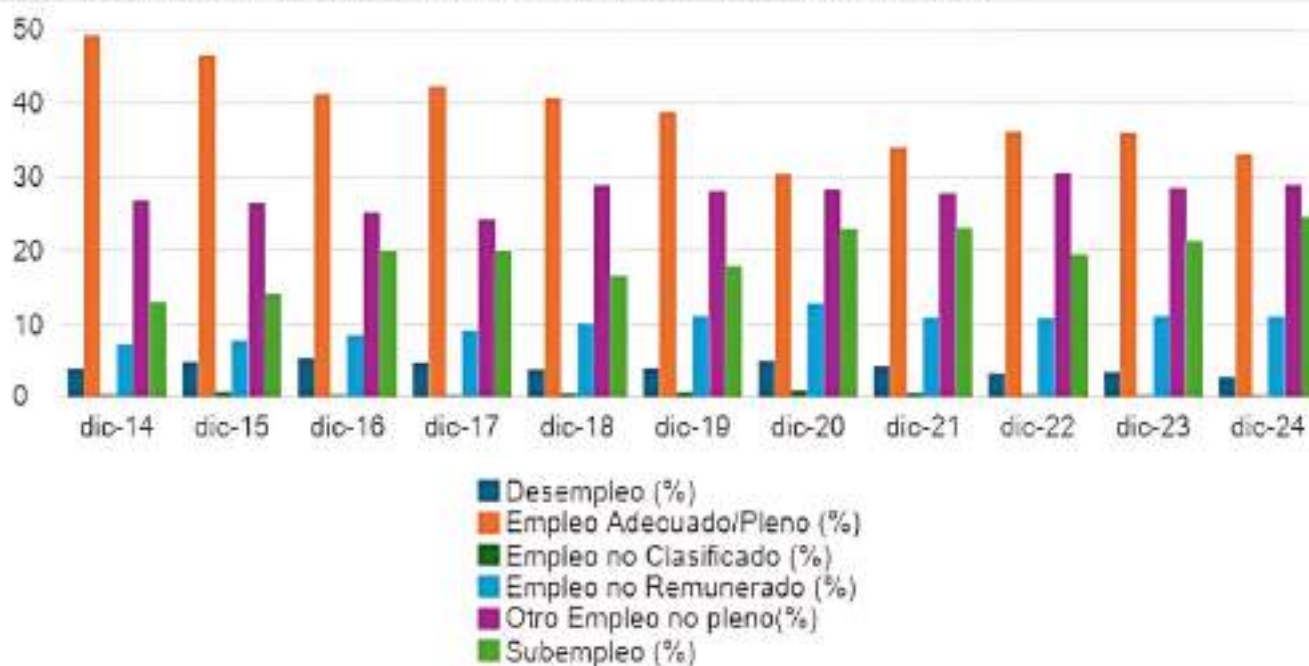
Por otro lado, el gobierno que asumió el mandato en noviembre de 2023 ha enfrentado serias restricciones de liquidez y un alto déficit de financiamiento. En respuesta, implementó cambios tributarios como el aumento del IVA del 12% al 15% y la eliminación de la reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas, medidas que han reducido la liquidez del sector privado ecuatoriano.

Este tipo de políticas resultan especialmente preocupantes si se considera que, al comparar el desempeño hasta el tercer trimestre de cada año, la formación bruta de capital fijo (FBKF) alcanzó su punto máximo en 2014 y no ha logrado recuperar esos niveles. Como se muestra en el Gráfico 3, en 2024 la FBKF incluso se encuentra por debajo de los niveles registrados en 2012.



Esta falta de inversión se refleja directamente en la escasez de empleo adecuado en Ecuador. Como se observa en el Gráfico 4, este indicador se encuentra en uno de sus niveles más bajos de la última década, solo por encima de 2020, año marcado por la pandemia. Al mismo tiempo, el subempleo registra una de sus tasas más altas.

Gráfico 4. Indicadores de Empleo (Tasas - 15 años y más)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Viendo hacia el 2025

Los datos muestran que Ecuador enfrenta importantes desafíos estructurales. El país necesita seguir trabajando en la recuperación de la confianza de los mercados de capitales y en la creación de amortiguadores fiscales para hacer frente a un entorno internacional incierto. Además, es crucial que el gobierno gestione con mayor eficiencia su dependencia del sector petrolero, especialmente ante la inminente implementación del referéndum que frenará las operaciones en el Parque Nacional Yasuní, lo que se suma a la maduración de otros pozos y a la baja inversión en el sector.

Por otro lado, liberar el potencial de crecimiento del país es fundamental para generar más y mejores oportunidades laborales y reducir la pobreza.

Para lograrlo, se requiere construir un consenso político que permita superar las barreras estructurales que limitan la creación de empleo formal, la atracción de inversión privada y la diversificación de las exportaciones. Un claro ejemplo de estos desafíos es el desempeño de Ecuador en el Índice Global de Innovación 2024, donde ocupa el puesto 105 de 133 economías, situándose por debajo de países como Ghana, Namibia, Camboya y Rwanda, y apenas por encima de Bangladesh, Tayikistán, Trinidad y Tobago y Nepal. El informe también señala que Ecuador tiene un desempeño relativamente bajo en comparación con las expectativas para su nivel de desarrollo económico, situándose incluso por debajo del promedio de otros países de la región.

Aunque el Índice Global de Innovación 2024 aún no proporciona un análisis detallado de los indicadores clave que requieren atención, los datos del informe de 2023 ofrecen pistas sobre los principales desafíos. Entre los más preocupantes destacan la falta de seguridad jurídica, la baja calidad regulatoria que dificulta el desarrollo del sector privado, los altos costos de despido y la limitada integración comercial y financiera del país.

En la misma línea, un informe reciente del Banco Mundial, Ecuador: Crecimiento resiliente para un futuro mejor, además de señalar las barreras estructurales ya mencionadas, resalta la existencia de restricciones a la competencia y una normativa laboral excesivamente rígida.

En definitiva, Ecuador aún tiene un largo camino por recorrer para convertirse en un país verdaderamente competitivo, atractivo para la inversión y capaz de generar riqueza y oportunidades para todos. Entre las principales tareas pendientes se encuentran reforzar una gestión responsable de las finanzas públicas y fomentar la inversión privada, incluso en sectores estratégicos.

Dado que nos encontramos en un año electoral, es fundamental analizar las propuestas de los candidatos con una mirada crítica, ya que sus planteamientos definirán qué tan cerca estaremos de construir ese Ecuador más libre y próspero que tanto anhelamos.

HONDURAS TIERRA DE OPORTUNIDADES EN ESTE 2025: POTENCIAL, RETOS Y ESTRATEGIAS PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE



Anabel Gallardo

Presidenta Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP



Honduras es un país vibrante y lleno de posibilidades, donde la riqueza de su tierra se complementa con la determinación y el talento de su gente. Desde sus majestuosos paisajes hasta su espíritu emprendedor, el país se posiciona como un actor clave en el desarrollo económico y social de la región.

Con una fuerza laboral joven y resiliente, una ubicación estratégica en el corazón de América, y un sector productivo en constante evolución, Honduras es sinónimo de potencial y crecimiento. Su gente, con su calidez y compromiso, es el motor que impulsa la innovación, la sostenibilidad y la competitividad en diversos sectores.

Honduras cuenta con diversas fortalezas que le otorgan un potencial significativo para el crecimiento económico y la atracción de inversiones. Su ubicación estratégica en el centro de América permite una conexión rápida con los principales mercados de la región y con Estados Unidos. Además, el país dispone de cuatro aeropuertos internacionales y uno regional, facilitando la movilidad de pasajeros y mercancías.

Otro factor clave es Puerto Cortés, la principal terminal marítima del país y una de las más importantes de Centroamérica, certificada por EE. UU. bajo el programa de Aduana de Contenedores Seguros (C-TPAT).

Esta infraestructura logística robusta proporciona una ventaja competitiva para el comercio exterior y la integración con cadenas de suministro globales. La población hondureña también representa un activo estratégico. Se caracteriza por ser joven, trabajadora y cada vez más bilingüe, lo que la convierte en una fuerza laboral atractiva para sectores de alta demanda de mano de obra como la manufactura, los servicios empresariales y el turismo.

En Honduras también poseemos un enorme potencial en el sector agroindustrial, con tierras fértiles y climas propicios para la producción de café, banano, palma africana y otros productos de exportación.

Asimismo, el país tiene una creciente industria manufacturera, particularmente en la maquila textil y de autopartes, que genera miles de empleos y contribuye significativamente al PIB nacional.

A pesar de nuestras ventajas competitivas, aún enfrentamos retos que deben ser abordados para fortalecer nuestra economía. El acceso a divisas de manera oportuna y más eficiente, el costo de la energía y la seguridad son factores que influyen en la competitividad del país. En este sentido, el Banco Central de Honduras debe continuar implementando medidas que garanticen un acceso adecuado a divisas, brindando estabilidad y certeza a las empresas que operan en el país.

De igual forma, es esencial reducir las barreras burocráticas y mejorar la infraestructura para optimizar la eficiencia empresarial. La digitalización de trámites y la implementación de políticas públicas claras y participativas permitirán mejorar la confianza y fortalecer el tejido social hondureño.

El 2025 marca un punto de inflexión para nuestro país, no solo en términos de liderazgo político, sino también en la definición del rumbo económico y social para la nación. Las elecciones presidenciales representan una oportunidad para reforzar la democracia, la estabilidad y la confianza en las instituciones.

La transparencia en el proceso electoral y una transición ordenada serán fundamentales para mantener un clima propicio para los negocios y la inversión.

Desde el sector privado hemos subrayado la necesidad de que los candidatos enfoquen sus propuestas en resolver los desafíos más apremiantes para los hondureños: la generación de empleo formal, la mejora de la seguridad ciudadana, el acceso a educación de calidad y el mejoramiento del entorno de inversión. Lograr un marco jurídico estable y simplificar los trámites administrativos son clave para incentivar la inversión tanto nacional como extranjera. Las remesas han sido un pilar fundamental en la economía hondureña, representando. Sin embargo, esta alta dependencia indica la necesidad de fortalecer el empleo local y crear nuevas oportunidades para evitar la migración forzada.

En este contexto, los migrantes retornados representan una oportunidad para el desarrollo económico del país, ya que muchos de ellos regresan con habilidades y conocimientos adquiridos en el extranjero.

Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se ha promovido la creación de políticas de reinserción laboral, como la reforma al Código de Trabajo que permita a las empresas contratar por tiempo parcial a las personas. Este tipo de iniciativas contribuirán a facilitar la inserción de los retornados en el mercado laboral y a promover la creación de nuevas plazas de trabajo, principalmente en sectores estacionales como el turismo y el agrícola.

También, desde el COHEP hemos desarrollado la plataforma Empleo Conecta, un portal que vincula a personas en búsqueda de empleo con empresas que requieren talento calificado facilitando la búsqueda de talento y reduciendo los tiempos de búsqueda de empleo a las personas. Además, en un mundo cada vez más digitalizado, Honduras tiene la oportunidad de impulsar su competitividad a través de la adopción de nuevas tecnologías. La digitalización y la transformación digital pueden mejorar la eficiencia empresarial, facilitar la transparencia en el sector público y ampliar el acceso a mercados internacionales.

El fomento de la economía digital, la inversión en infraestructura tecnológica y la capacitación en habilidades digitales serán clave para preparar a la fuerza laboral ante los desafíos del futuro. La adopción de plataformas de comercio electrónico, la automatización de procesos industriales y la expansión del acceso a internet en zonas rurales contribuirán significativamente a cerrar la brecha digital y fortalecer la economía del país.

Para lograr estos objetivos, es fundamental que el sector público y privado trabajen de manera conjunta en el diseño de políticas que promuevan la inversión en tecnología y la innovación en sectores estratégicos como la educación, la salud y el comercio. La transformación digital no solo impulsará la productividad y el empleo, sino que también posicionará a Honduras como un país más competitivo en el escenario global. Por tanto, el país tiene una oportunidad única para transformar su economía, diversificar sus sectores productivos y fortalecer su competitividad global.

Si se logran establecer condiciones adecuadas para el desarrollo empresarial y se fomenta la capacitación de la fuerza laboral, Honduras podrá consolidarse como un destino atractivo para la inversión y un lugar donde los hondureños puedan prosperar sin necesidad de emigrar.

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA ECONÓMICA DE MÉXICO



Francisco Cervantes Díaz

Presidente Consejo Coordinador Empresarial

El 2025 presenta un entorno económico desafiante, pero también ofrece oportunidades para que México fortalezca su economía y su posición en el escenario global.

La incertidumbre generada por las políticas económicas de la administración del Presidente Trump nos invita a reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades, y a trabajar juntos para abordar los desafíos pendientes en nuestra política interna. Aunque las amenazas de medidas arancelarias por parte del presidente Donald Trump generan nerviosismo, también nos dan la oportunidad de diversificar nuestros mercados, debemos trabajar juntos para crear un entorno económico más atractivo y competitivo, que invite a la inversión y al crecimiento.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el "Plan México, estrategia nacional de industrialización y prosperidad compartida" en el que se plantea la visión a futuro del país, que incluso vaya más allá de este sexenio.



El Plan se integra de 13 metas que tienen como propósito hacer de México "el mejor país del mundo disminuyendo la pobreza y la desigualdad" y para ello se contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares (mmd).

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el "Plan México, estrategia nacional de industrialización y prosperidad compartida" en el que se plantea la visión a futuro del país, que incluso vaya más allá de este sexenio.

El Plan se integra de 13 metas que tienen como propósito hacer de México "el mejor país del mundo disminuyendo la pobreza y la desigualdad" y para ello se contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares (mmd).

Dichas metas son:

1. Ubicar al país en el Top 10 de las economías del mundo.
2. Hacer que la inversión supere el 25% del PIB a partir de 2026 y el 28% en 2030.
3. Generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura.
4. 50% de la proveeduría y el consumo nacional, serán hechos en México en los sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes.
5. Aumentar en 15% el contenido nacional.
6. El 50% de las compras públicas serán de producción nacional.
7. Vacunas hechas en México.
8. Se reducirá de dos años y medio a un año el tiempo para concretar una inversión con 50% menos trámites y requisitos.
9. Crecer en 150 mil profesionistas y técnicos adicionales a los que ya se generan anualmente.
10. Sostenibilidad ambiental empresarial.
11. 30% de PYMES con acceso a financiamiento.
12. Ubicar a México dentro de los cinco países más visitados a nivel mundial.
13. Reducir la pobreza y la desigualdad.

Si bien el Plan es ambicioso la instrumentación de medidas concretas e inmediatas, especialmente en materia de mejorar el ambiente para la inversión pueden ayudar a retomar un ritmo de crecimiento más elevado y sostenible en el mediano y largo plazos, con el objetivo de mejorar la situación de los hogares.

En este momento, es fundamental que nos unamos para abordar algunos desafíos importantes que afectan a nuestra comunidad, también es crucial trabajar juntos para fortalecer la certeza jurídica y simplificar la regulación, de manera que podamos crear un entorno más seguro, justo y próspero para todos. Asimismo, la sostenibilidad de las finanzas públicas es vital. Los recursos públicos destinados a infraestructura, energía, comunicaciones y transporte, seguridad, educación y salud, son fundamentales para impulsar el crecimiento de la economía.

Es importante tener en cuenta que la inversión pública es un detonador esencial de la inversión privada, que solo fluirá hasta tener la certeza de un entorno atractivo, y precisamente el Plan México busca fortalecer a la industria mexicana. No obstante, es claro que lograr las metas planteadas será un importante reto y, dada la necesidad creciente de recursos, es factible que su cumplimiento pueda llevar más tiempo de lo previsto. Hay que considerar que la inversión privada comenzará a fluir una vez que haya certeza de un ambiente propicio para los negocios. La confianza es fundamental en este proceso. Una señal muy poderosa para incentivar mayores flujos de inversión nacional e internacional en el futuro sería que la elección en junio próximo de los integrantes del poder judicial se lleve a cabo sin contratiempos y con resultados robustos y legítimos. Por ahora, las expectativas para el 2025 implican diversos retos, sobre todo en relación con lo que requiere el país, que son tasas de crecimiento superiores a 4%.

En la encuesta de expectativas del Banco de México se prevé que este año la economía crezca solo 1.1%, por lo que habremos de redoblar esfuerzos, sector público y privado, para superar estas expectativas. Es importante reconocer que la actividad económica sigue enfrentando desafíos. La inversión es un motor clave para el crecimiento, pero es comprensible que los inversores estén esperando a que se clarifiquen algunos factores importantes, como la reforma judicial y las políticas comerciales internacionales.

Como sector privado, creemos que es fundamental trabajar juntos para crear un entorno que fomente la inversión y el crecimiento. Esto significa asegurar la seguridad jurídica plena, con reglas del juego claras y cumplimiento de contratos. Estamos dispuestos a colaborar con el gobierno y otros actores para encontrar soluciones que promuevan la confianza y la inversión en nuestro país.

Es cierto que las acciones de la administración de Donald Trump han generado preocupación en nuestro país. La imposición de tarifas extraordinarias al acero y el aluminio, así como las medidas migratorias, han creado un entorno de incertidumbre que podría afectar la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, creemos que, en lugar de enfocarnos en los obstáculos, debemos trabajar juntos para encontrar soluciones. Es indispensable un mayor esfuerzo de todos los sectores para establecer un ambiente que estimule la inversión, el crecimiento y la competitividad. Por lo tanto, el sector empresarial se compromete a trabajar de manera conjunta con el gobierno y otros actores para fomentar la inversión y el crecimiento económico, promover la competitividad y la innovación para generar un ambiente de negocios favorable y predecible. Si bien la percepción de menores niveles de competitividad y un mayor grado de corrupción en nuestro país es una preocupación compartida por muchos, creemos que estos desafíos también representan oportunidades para trabajar juntos y encontrar soluciones.

México tiene un gran potencial para mejorar su competitividad y transparencia. Podemos aprender de los países que se encuentran en los primeros lugares de los rankings internacionales y adoptar mejores prácticas para impulsar nuestro crecimiento económico y desarrollo social. Es tiempo de unirnos y trabajar juntos para abordar estos desafíos. Los empresarios, el gobierno y la sociedad civil podemos colaborar para crear un entorno más competitivo, transparente y justo. Estamos seguros de que, juntos, podemos superar estos obstáculos y construir un futuro más próspero y sostenible para México y para los mercados internacionales.

PRIORIDADES Y DEMANDAS DEL SECTOR PRIVADO EN MÉXICO



Juan José Sierra Álvarez
Presidente Nacional Coparmex



México se encuentra en un punto decisivo para definir su rumbo hacia un futuro más próspero, competitivo y equitativo.

El 2025 trae consigo desafíos significativos, pero también oportunidades clave para consolidar un crecimiento económico sostenible, reforzar la seguridad y la certeza jurídica, así como fortalecer la participación del sector privado en la transformación del país.

El panorama internacional arranca con ajustes en las políticas comerciales y un nuevo periodo de gestión en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Sus decisiones en materia de comercio exterior, política migratoria y relación bilateral con México generan incertidumbre, lo que obliga a los empresarios nacionales a replantear estrategias para diversificar mercados, fortalecer el comercio interno y aprovechar nuevas oportunidades en el escenario global.

Frente a un entorno desafiante, el sector privado reconoce la necesidad de adoptar soluciones innovadoras y sostenibles que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan el Estado de derecho y consoliden el nearshoring como una estrategia clave de desarrollo, generando un clima propicio para la inversión productiva. Aunque los retos son complejos, también representan una oportunidad para construir soluciones efectivas mediante el trabajo conjunto. En este contexto, es prioritario atender las principales demandas del sector empresarial, enfocadas en fortalecer la competitividad, brindar mayor certidumbre y contribuir al bienestar social.

Fortalecimiento de las MiPyMEs: pilar del desarrollo empresarial

Una de las prioridades para 2025 es impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan el 99% del tejido empresarial del país y son la base de la economía nacional.

Para ello, es esencial mejorar su acceso a recursos, fomentar la capacitación en tecnologías digitales y fortalecer la educación financiera. Además, se requiere promover esquemas de crédito más accesibles que les permitan escalar y competir en mercados nacionales e internacionales. Asimismo, la simplificación de procesos y la creación de incentivos fiscales son clave para promover la formalidad entre las MiPyMEs. Es fundamental generar un marco normativo más eficiente, que facilite el registro y operación de los negocios, reduciendo costos y fomentando el crecimiento empresarial dentro de la economía formal.

Seguridad, justicia y paz: condiciones esenciales para la inversión

Uno de los temas más relevantes para el sector privado es el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad. La impunidad y la violencia afectan tanto a los ciudadanos como a las empresas, generando costos adicionales y limitando el crecimiento económico. Para garantizar un entorno propicio para la inversión, es fundamental mejorar las instituciones de justicia, combatir la corrupción y fortalecer los mecanismos de protección empresarial.

La paz solo es posible cuando se establece un Estado de derecho que garantice justicia para todos. Empresarios, colaboradores y familias necesitan un sistema judicial fuerte y libre de corrupción.

Por ello, trabajamos activamente con autoridades, iglesias y sociedad civil para impulsar la Agenda Nacional de Paz, con el propósito de reconstruir el tejido social, comenzando por las familias, los colaboradores y las comunidades. Además, promover la generación de empleos dignos que brinden estabilidad y contribuyan a su desarrollo integral es clave para lograr un entorno más seguro y próspero.

Educación: la clave para un México competitivo

La educación media superior con formación práctica es clave para construir un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible. Invertir en la formación de estudiantes a través de esquemas como la Educación Dual no solo fortalece el talento humano, sino que también genera un impacto positivo en la sociedad. Vincular la educación con el mundo laboral permite que más estudiantes tengan acceso a oportunidades reales de crecimiento, reduciendo brechas y promoviendo una economía más justa e incluyente. Empresas y comunidades se benefician cuando la educación y el empleo van de la mano.

Certeza jurídica e inversión

Para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo económico, es crucial garantizar un marco jurídico estable y confiable. La certeza jurídica brinda confianza a ciudadanos y empresarios, facilitando la toma de decisiones de largo plazo y asegurando que México siga siendo un destino atractivo para la inversión extranjera.

Combate a la corrupción y transparencia

La lucha contra la corrupción es un eje fundamental para fortalecer la competitividad del país. Se requiere impulsar políticas que refuercen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promoviendo un entorno empresarial más equitativo y seguro para la inversión.

Nearshoring: una oportunidad estratégica para la competitividad internacional

El nearshoring representa una oportunidad histórica para México. La reconfiguración de las cadenas globales de suministro ha colocado a nuestro país en una posición privilegiada para atraer inversiones que buscan proximidad al mercado estadounidense.

Sin embargo, para que esta estrategia sea efectiva, es necesario mejorar la infraestructura logística, garantizar el acceso a energía confiable y sustentable, y reducir la inseguridad que afecta a algunas regiones del país.

Desde el sector privado insistimos en la necesidad de una política industrial moderna que facilite la atracción de inversiones y fomente el desarrollo de sectores estratégicos como la manufactura avanzada, la tecnología y la industria automotriz. La capacidad de generar empleos bien remunerados y el desarrollo de talento especializado serán determinantes para consolidar el potencial del nearshoring en el país.

Unidad nacional: Un imperativo para el progreso

México enfrenta un contexto de alta polarización en los ámbitos social, económico y político. Es necesario fortalecer la unidad nacional y construir consensos que permitan impulsar el crecimiento y el bienestar de todos los ciudadanos. El sector privado se compromete a trabajar en conjunto con diferentes actores para reducir las divisiones y promover un México más próspero e incluyente.

Conclusiones: Construyendo el futuro económico de México

El 2025 será un año clave para definir el rumbo económico de México. En un entorno internacional cambiante y con retos internos que requieren atención inmediata, el sector empresarial tiene la capacidad de generar desarrollo, empleo y bienestar. Para lograrlo, es fundamental construir condiciones que fomenten la inversión, el crecimiento y la seguridad.

El llamado es claro: necesitamos estabilidad, certeza jurídica y una política económica que potencie el talento y la innovación. Solo así podremos consolidar a México como un actor relevante en la economía global y garantizar un futuro próspero para las siguientes generaciones.

PERSPECTIVAS SOCIOECONÓMICAS Y EMPRESARIALES PARA MÉXICO 2025



Sergio E. Contreras

Presidente Ejecutivo Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología-COMCE



Introducción

México, siendo la segunda economía de América Latina y la primera en exportaciones¹⁸, enfrenta un panorama empresarial en constante evolución. Con una ubicación geográfica privilegiada y una población joven y dinámica, el país tiene el potencial de convertirse en un líder en innovación y sostenibilidad. Las perspectivas socioeconómicas y empresariales para México en 2025 son un tema amplio que abarca diversas áreas, incluyendo el comercio internacional, la atracción de inversión, el desarrollo sostenible y la innovación.

Crecimiento Económico

México es el 9° exportador y el 9° destino de inversión a nivel global y según cifras del Banco Mundial el comercio exterior mexicano represento el 74% del Producto Interno Bruto.¹ El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que el PIB de México creció un 1.5% en 2024.² Estos datos reflejan la apertura económica del país y su gran integración en materia de comercio internacional

Comercio Internacional

Actualmente México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 50 países. Además, tiene 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

En 2024, las exportaciones mexicanas alcanzaron un total de 617,099.6 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 4.1%.⁴ Por otro lado, las importaciones en ese año se incrementaron a 625,311.8 millones de dólares.

Para México los principales destinos de exportación en 2024 fueron Estados Unidos (\$472,218,008 USD), seguido de Canadá (\$17,720,144 USD) y China (\$9,151,446 USD), consolidando su papel estratégico en las cadenas globales de suministro.

El T-MEC es un acuerdo estratégico para México por el volumen de comercio, y a pesar de los retos que suponen algunos mercados proteccionistas, Estados Unidos y Canadá seguirán siendo en 2025 mercados prioritarios y naturales con una oportunidad creciente para los sectores de manufactura, agricultura y tecnología mexicanos entre otros.

En 2023, la Unión Europea fue el tercer socio comercial de México con aproximadamente 85,000 millones de dólares de comercio bilateral de mercancías, tras Estados Unidos y China. La Unión Europea fue el segundo mayor mercado de exportación de México después de Estados Unidos con aproximadamente 29,500 millones de dólares y fue la tercera fuente de importaciones de México, después de Estados Unidos y China, de acuerdo con los datos provistos por la Comisión Europea.⁷

El nuevo TLCUEM, cuyas negociaciones se estima terminen durante el 2025, es un acuerdo de última generación que busca fortalecer las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea, adaptándose a las nuevas condiciones del comercio internacional, promoviendo un enfoque más integral que incluye sostenibilidad, derechos laborales, comercio digital, buenas prácticas regulatorias y transparencia, entre otras. La modernización de este tratado no solo beneficia el flujo de comercio de productos, servicios e inversión, sino que también busca un desarrollo equilibrado y sostenible para ambas partes.

Dando continuidad al T-MEC, así como a los otros tratados y acuerdos comerciales como el TLCUEM firmados por México, se anticipa para el 2025 un incremento en el comercio del país, reforzando las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y sus socios de negocios, lo que puede traducirse en colaboración en otras áreas como seguridad, migración, desarrollo regional, atracción de inversión y competitividad en un contexto global.

Inversión Extranjera Directa (IED)

Banco de México estimó la IED al cierre del 2024 en 37,435 millones de dólares y para el 2025 las expectativas en la recepción de IED son en promedio de 39,212 millones de dólares¹⁷. En 2024, Estados Unidos se consolidó como nuestro principal inversionista, aportando el 40.50% de los flujos totales, con una inversión de \$14,474 millones de dólares^{14 16}. Le siguieron Japón con el 12.51%, Alemania con el 10.88%, Canadá con el 7.26%, Países Bajos con el 5.35% y Bélgica con el 4.25%, el 19.25% restante fue aportado por otros países (3T).¹⁵ Asimismo, se observa un creciente interés en México de economías como Suiza, Argentina y Corea del Sur, como destino de sus inversiones, principalmente en industrias como la alimentaria, la siderurgia y el equipo de transporte.⁸ De acuerdo con el Informe sobre Inversiones en el Mundo (World Investment Report 2024) publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México se integra al Top 10 de las economías con mayor recepción de IED en el Mundo ocupando el lugar número 9.⁸

Para 2025 se estima que México seguirá siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en sectores como tecnología, energías renovables y manufactura avanzada. Las políticas gubernamentales y el entorno regulatorio serán determinantes en este aspecto.

Prioridades Socioeconómicas para 2025

En México, el Plan Nacional de Desarrollo rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal. Sus ejes generales para el 2025 - 2030 son la gobernanza con justicia y participación ciudadana, el desarrollo con bienestar y humanismo, la economía moral, el trabajo y el desarrollo sustentable. Sus ejes transversales son la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres, la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, los derechos de las comunidades indígenas y afro mexicanas. También contiene los 100 compromisos proclamados por el gobierno actual.⁹ Para el año 2025, México enfrenta un panorama socioeconómico complejo con varias prioridades clave. El paquete económico presentado por el gobierno federal busca reducir el déficit fiscal y mantener un nivel de deuda manejable alrededor del 50% del PIB y se enfoca en mejorar la eficiencia recaudatoria sin aumentar impuestos, por medio del uso de inteligencia fiscal.

Además, se prioriza el gasto social, con asignaciones significativas a salud, educación y seguridad.¹⁰ Englobando las prioridades socioeconómicas para el 2025 estas serían las siguientes:

1. Reducción de la Desigualdad

La desigualdad económica es uno de los principales retos que enfrenta México. Cerca del 40% de la población vive en condiciones de pobreza, lo que implica un acceso limitado a servicios básicos, educación y salud. Las prioridades deben centrarse en la creación de políticas que promuevan la inclusión social, el acceso a educación de calidad y la capacitación laboral. Las empresas pueden contribuir a este objetivo a través de programas de responsabilidad social y alianzas con el gobierno y la sociedad civil.

2. Innovación y Digitalización

La transformación digital es una prioridad fundamental para el sector privado. La pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales, y las empresas deben seguir

invirtiendo en innovación para mejorar sus procesos y productos. Se requiere un enfoque en la educación en habilidades digitales, así como en la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Las empresas mexicanas que no se adaptan a esta nueva realidad corren el riesgo de quedar rezagadas en un mercado global cada vez más competitivo.

3. Sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo tanto para las empresas como para los consumidores en México. Las empresas deben adoptar prácticas sostenibles en sus operaciones, desde la cadena de suministro hasta la producción, para mitigar su impacto ambiental.

Además, se necesita un marco regulatorio que fomente la sostenibilidad y brinde incentivos a las empresas que implementen prácticas responsables. Esta prioridad no solo es crucial para el medio ambiente, sino que también puede generar oportunidades de negocio en el sector de las energías renovables y tecnologías limpias.

Principales Demandas del Sector Privado

Con base en la situación económica estimada, las principales demandas del sector privado para afrontar el 2025 y los próximos años se agrupan a continuación:

1. Mejora en el Clima de Negocios

Una de las principales demandas del sector privado es un clima de negocios más favorable. Esto incluye la reducción de la burocracia, la simplificación de trámites y un marco legal más claro y predecible. Las empresas solicitan un entorno que fomente la inversión y brinde certidumbre jurídica. La implementación de políticas que promuevan la transparencia es fundamental para mejorar la confianza en las instituciones.

2. Infraestructura y Conectividad

La infraestructura es clave para el desarrollo económico. Las empresas demandan inversiones en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones para mejorar la conectividad y la eficiencia operativa. La modernización de puertos, aeropuertos y carreteras es esencial para facilitar el comercio y atraer inversiones.

Asimismo, el acceso a Internet de alta velocidad es fundamental para la digitalización de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. Con el Plan México, se invertirá en la ampliación de la red de carreteras, modernización de puertos y aeropuertos, en fortalecer la red ferroviaria y los servicios de internet en el país.

3. Educación y Capacitación

La educación y la capacitación son cruciales para el desarrollo de una fuerza laboral competitiva. El sector privado demanda una mayor colaboración con el gobierno y las instituciones educativas para alinear los programas académicos con las necesidades del mercado laboral. Invertir en formación continua y en habilidades técnicas y digitales es esencial para preparar a los trabajadores para el futuro del trabajo. Para ello, el gobierno de México ampliará el acceso a la educación media superior y superior y su vínculo con el plan de desarrollo nacional.

Oportunidades para el Sector Empresarial

El Plan México presentado por el gobierno mexicano impulsará el contenido regional y local de los productos. Promoverá polos de desarrollo y de bienestar a partir de vocaciones regionales. Se fomentará la relocalización de empresas extranjeras para que aprovechen los beneficios que ofrece México como país. Se busca crecer 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor en los sectores: automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros. Que al menos el 30% de las pymes tengan acceso a financiamiento. Se implementarán polos de bienestar para el desarrollo de empresas integradas. Y se impulsarán sectores como el agroindustrial, textil y calzado, farmacéutico y dispositivos médicos, energía, automotriz, aeroespacial, semiconductores, química y petroquímica y bienes de consumo. Con esto México pretende mejorar su competitividad en el mercado global y fortalecer su posición como un actor clave en el comercio internacional. La implementación efectiva de estas estrategias en el 2025 será crucial para lograr los objetivos propuestos.

Mercados Internacionales

La apertura de nuevos mercados internacionales representa una gran oportunidad para las empresas mexicanas. La diversificación hacia mercados en Asia, Europa, África y América Latina puede ayudar a mitigar riesgos y aumentar las exportaciones. La participación en tratados de libre comercio y la promoción de productos mexicanos en el extranjero son estrategias clave para aprovechar estas oportunidades.

Inversión en Tecnologías Emergentes

La inversión en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el blockchain y la automatización, puede mejorar la competitividad de las empresas mexicanas. La adopción de estas tecnologías no solo optimiza procesos, sino que también abre nuevas oportunidades de negocio en sectores innovadores.

Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Las empresas mexicanas que adopten prácticas responsables y sostenibles estarán mejor posicionadas para captar la atención de los consumidores y los inversores. La sostenibilidad no solo es una responsabilidad social, sino también una oportunidad comercial. Las empresas pueden desarrollar productos y servicios que respondan a la demanda de los consumidores conscientes del medio ambiente.

Conclusión

Las perspectivas para el sector empresarial en México hacia 2025 están llenas de desafíos, pero también de oportunidades. Para navegar este panorama, es fundamental que el país se enfoque en reducir la desigualdad, fomentar la innovación, y promover la sostenibilidad. El sector privado, por su parte, requiere y debe promover un clima de negocios favorable, invertir en infraestructura y colaborar en la formación de una fuerza laboral competitiva. La colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil será esencial para construir un futuro próspero y sostenible para México.

Fuentes:

1. Banco Mundial: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=MX>
2. INEGI: <https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/>
3. Gobierno de México: <https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/potencia-comercial/#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n,%C2%B0%20importador%20en%20el%20mundo.>
4. INEGI: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/comext_o/balcom_o2025_01.pdf
1. FMI: <https://www.imf.org/es/Publications/WE0/Issues/2025/01/17/world-economic-outlook-update-january-2025#:~:text=Crecimiento%20mundial%20dispar%20e%20inciertoCtext=Se%20prev%C3%A9%20que%20el%20crecimiento,%20del%203%2C7%25.>
2. SE: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/country/comunidad-europea?timeSelector=Quarter>
3. UE: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mexico_en
4. CRM: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/963441/Informe_Congreso_2024_3T.pdf
5. SGYPR: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/966672/pnd-completo-2025-2030.pdf>
6. SAT: <https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2025>
7. WEF: <https://www.imf.org/en/Publications/WE0/Issues/2024/10/22/world-economic-outlook-october-2024>
8. BM: <https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview#:~:text=Con%20una%20poblaci%C3%B3n%20de%20casi%20130%20millones%2C,tiene%20instituciones%20macroecon%C3%B3micas%20s%C3%B3lidas%2C%20est%C3%A1%20abierto%20al>
9. SG: <https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/potencia-comercial/#:~:text=En%20Am%C3%A9rica%20Latina%2C%20las%20exportaciones,la%20mitad%20en%20la%20regi%C3%B3n.>
10. SG: <https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida>
11. SE: <https://www.cefp.gob.mx/ixDOCs/2017/283-241205.pdf>
12. <https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/destino-de-inversion/>
13. <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24Caccion=consultarCuadroAnaliticoCidCuadro=CA248Clocale=esCcuadroAnaliticoFechaCuadro=01/12/2024>
14. <https://es.statista.com/estadisticas/1065726/pib-por-paises-america-latina-y-caribe/>



MÉXICO APUNTA A UN CRECIMIENTO IMPULSADO POR EL DIÁLOGO ENTRE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

“Consolidamos el diálogo para construir alianzas sólidas y generar sinergias estratégicas que impulsen el desarrollo económico entre nuestras naciones.”



Octavio de la Torre

Presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México



La Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, conocido como “Plan México”, presentado por la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es reconocido por el sector privado mexicano como una guía para fomentar el crecimiento económico, siempre y cuando se implemente y ejecute con colaboración y diálogo permanente.

Asimismo, el diálogo cohesionado, no solo entre el sector público y el privado, sino también con las contrapartes privadas de los principales socios comerciales de México es indispensable para promover alianzas estratégicas y fortalecer la competitividad. Esta gran conclusión surge de los distintos Foros Binacionales de Negocios T-MEC, realizados en enero pasado y de la agenda de acuerdos comunes en varios sectores, liderados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO).

El diálogo Nacional e Internacional entre privados siempre es un reto; sin embargo, como representantes del sector Comercio, Servicios y Turismo de México. En 2025 buscamos marcar un hito con acciones que transformen el ecosistema de negocios del país conectando lo local con lo global, el comercio tradicional con la innovación, las prácticas análogas con la transformación digital, y la gobernanza reforzada con las normas de cumplimiento y la transparencia.

Esto se puede lograr en conjunto ya que CONCANACO SERVYTUR actualmente representa legalmente a 5.2 millones de negocios, empresas y comercios que generan 43.8 millones de empleos, es decir, el 74% del empleo en el país, y contribuye como Sector al 80% del Producto Interno Bruto de México.

Lo anterior nos permite poner al servicio de la comunidad empresarial en el exterior, la conexión con una red de 258 Cámaras y 976 oficinas en el territorio mexicano.

Los datos señalados son una realidad. La Confederación es un organismo que en 2025 cumplirá 108 años de historia; creada y regulada por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones legítima su existencia y participación en el rumbo económico y social del país. Al ser una institución de interés público, tiene entre sus tareas y razón de ser, la de representar, promover y defender con firmeza al Comercio, los Servicios y el Turismo del país; apoyando iniciativas, decretos, reglamentos y documentos de posición empresarial orientados a contribuir siempre y en todo momento con el crecimiento y desarrollo de México.

Uno de los mejores ejemplos de diálogo y construcción de la agenda 2025, en lo relacionado a la política exterior con Estados Unidos fueron los Foros Binacionales de Negocios T-MEC, realizados con el propósito de fomentar el diálogo empresarial en el camino hacia la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En cinco días consecutivos, se generó el mayor diálogo binacional fronterizo con la participación de cinco entidades federativas nacionales y un estado de los Estados Unidos: Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Texas, Baja California y Sonora, reuniendo a 631 líderes empresariales, cónsules, senadores, diputados, sociedad civil y funcionarios de gobierno de Estados Unidos, Canadá y México.

Para los lectores, este tema no solo es relevante para los tres países, sino para la mayoría de los países del mundo que comercian con este bloque. Como antecedente, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las negociaciones para modernizar el TLCAN comenzaron en agosto de 2017, en un contexto de creciente proteccionismo a nivel global, las cuales no estuvieron libres de controversias y anécdotas. Esto refleja la importancia del diálogo técnico y la discusión profunda sobre las consecuencias de asumir determinados compromisos, antes de tomar decisiones en la negociación. Lo anterior concluyó el 30 de noviembre de 2018, tras un intenso diálogo, los tres países firmaron el nuevo acuerdo comercial: el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este tratado, que entró en efecto el 1 de julio de 2020, representó un nuevo capítulo en la historia de la integración económica de América del Norte, a la fecha.

Con estos Foros Binacionales T-MEC, junto con la agenda de diálogo impulsada con países como Portugal, Uruguay, Corea, Argentina, Chile, Alemania, Turquía, Singapur y España, la Confederación recaba opiniones, propuestas y recomendaciones de distintos sectores productivos y autoridades locales, con el propósito de fortalecer la agenda bilateral y potenciar el desarrollo económico regional.

Retos de la agenda 2025 a socializar y trabajar entre la comunidad empresarial y autoridades de México, con información derivada de los Foros Binacionales T-MEC:

1. Mayor integración regional y competitividad global: Fortalecer la cohesión entre el sector público y privado en México, así como establecer canales de comunicación ordenados con las contrapartes privadas de otros países socios.
2. Capacitación continua: Necesidad de contar con una guía clara sobre regulaciones comerciales para las PYMEs, así como brindar capacitación a empresarios y estudiantes universitarios en normativas internacionales. Es importante la formación de nuevos técnicos en materias de comercio internacional.
3. Mejora de participación en el comercio global: El debate sobre el T-MEC no debe centrarse solo en el comercio intra-regional, sino en estrategias para fortalecer la presencia de la región en el comercio global.
4. Certidumbre jurídica para la inversión: Es crucial mejorar la percepción y estabilidad de toda institución vinculada a la seguridad jurídica para el inversionista y garantizar un entorno propicio para la inversión de forma planificada, ordenada y amigable con el medio ambiente y el uso de recursos.
5. Infraestructura clave: Modernización, mejora y ampliación de carreteras, cruces fronterizos, vías férreas, aduanas y puertos para optimizar el flujo comercial y la integración de las cadenas de valor. Existe una capacidad instalada insuficiente para atender el tránsito actual de trailers con una tendencia creciente en número de unidades y un déficit en la disponibilidad de conductores y servicios de reparación.
6. Controles de aduanas: Mejorar la coordinación entre aduanas y la guardia nacional para evitar obstáculos innecesarios y lentitud en los procesos de tránsito.
7. Migración y mercado laboral: Convertir el fenómeno migratorio en una oportunidad identificando necesidades del mercado laboral y conectando la oferta migrante con la demanda de trabajo.
8. Estandarización de trámites: Es necesario homologar o hacer más eficientes los procesos para la apertura de negocios y obtención de permisos en distintas Entidades Federativas y municipios de México, con reducción de trámites y mejores servicios para mejorar los tiempos de establecimiento de nuevas empresas.

9. Agua y energía: Se requiere más inversión, ya que hay preocupación del sector productivo por las sequías cada vez más severas, lo cual genera incertidumbre para nuevas inversiones en el sector agropecuario y en la industria agroalimentaria, así como aquella intensiva en este recurso.

10. Crecimiento del comercio informal: El crecimiento del comercio informal es alta en aquellas ciudades con alto movimiento logístico.

México Fortalece su Atracción de Inversión con el Global Investment Consulting Center

En junio de 2024, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México (CONCANACO SERVYTUR), bajo la presidencia de Octavio de la Torre, lanzó el "CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL E INVERSIONES GLOBALES" ubicado en el edificio matriz en Ciudad de México.

Este Centro, denominado en Inglés como "Global Investment Consulting Center (GICC)" toma las mejores prácticas globales en facilitación de negocios para atender al inversionista y emprendedor extranjero que llega a México, y tiene el objetivo de conectar empresas extranjeras con la cadena de suministro mexicana, apoyar con herramientas de seguridad jurídica y digitalizar los negocios de las PYMEs, en el marco de la agenda por la transformación digital de México. El GICC es un coworking space en conjunto con una ventanilla única de servicios personalizados de consultoría integral para asistir el establecimiento de inversionistas nacionales, extranjeros y empresas de inversión extranjera en México.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran los siguientes:

- Primera experiencia cultural y de negocios.
- Apoyo en trámites migratorios.
- Asesoría en requisitos de Vivienda y alojamiento para inversionistas y familias.
- Apoyo con licencias de conducir y placas.
- Procedimientos para establecimiento de empresas.
- Facilitación de comercio y aduanas.
- Propiedad Intelectual.
- Soluciones financieras.
- Regulaciones para empleador.
- Plataforma de contratos inteligentes (blockchain)
- Servicios de trazabilidad y tokenización.
- Mediación, conciliación y arbitraje.
- Agendas de negocios en todo México.
- Charlas temáticas y eventos de conexión.
- Organización de misiones comerciales.
- Renta flexible de oficinas y estaciones de trabajo (coworking space).

En este centro se manejan también proyectos especiales de coordinación en capacitación de comercio exterior y acuerdos comerciales, así como otros estratégicos para el ecosistema de negocios de México.

Uno de ellos, es la coordinación de un Consejo de asesores en negociaciones comerciales para afrontar con responsabilidad estos retos ya que los acuerdos comerciales vigentes y los que están en agenda son parte de la evolución de la economía global y su implementación puede generar cambios y ajustes a lo largo del tiempo.

El Consejo Asesor Estratégico de Negociaciones Internacionales de la Confederación está conformado por profesionales con experiencia y alto conocimiento técnico de la normativa internacional del comercio que regula los acuerdos regionales de este tipo, en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

Ellos participan en las reuniones del Cuarto de Junto ampliado de México en apoyo a la Secretaría de Economía que negocia con otros estados.

La agenda de diálogo de la Confederación descrita brevemente en estas páginas nos muestra el compromiso que tenemos con México, los Foros Binacionales de Negocios T-MEC fueron una muestra de nuestro trabajo, las actividades con diversos países de otras regiones del mundo para generar alianzas y sinergias, son parte de la responsabilidad para fortalecer el comercio y los servicios locales del país, y seguramente de nuestros socios y aliados, pues las cadenas de valor de las naciones involucradas se activan como parte de los ciclos económicos generados.



PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE PANAMÁ PARA 2025



Gabriel Diez Montilla

Presidente Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP)

Introducción

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) juega un papel clave en el fortalecimiento del sector empresarial panameño, sirviendo como un puente entre el sector privado y el sector público. A través del diálogo y la cooperación estratégica, buscamos generar condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad privada, motor esencial del crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

Panamá cuenta con ventajas competitivas que lo han posicionado como un centro estratégico de negocios en la región. Su ubicación geográfica privilegiada, su conectividad global y su economía basada en los servicios le han permitido consolidarse como un hub logístico y financiero.

Sin embargo, el panorama global y los desafíos internos exigen continuar fortaleciendo el entorno empresarial para atraer inversión y diversificar la actividad económica. Para el 2025, es fundamental enfocarse en iniciativas que impulsen la productividad, la modernización de la economía y la mejora de las condiciones para hacer negocios.



En este documento, se presentan las prioridades socioeconómicas desde la perspectiva empresarial, así como las principales demandas del sector privado para fortalecer la competitividad del país y consolidar su atractivo como destino de inversión.

Prioridades Socioeconómicas desde la Perspectiva Empresarial

El crecimiento económico sostenible de Panamá depende de un sector privado fortalecido, capaz de generar empleo, innovación e inversión. Para 2025, es fundamental implementar estrategias que potencien la productividad, la competitividad y la diversificación económica, consolidando al país como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial.

Prioridades Socioeconómicas desde la Perspectiva Empresarial

El crecimiento económico sostenible de Panamá depende de un sector privado fortalecido, capaz de generar empleo, innovación e inversión. Para 2025, es fundamental implementar estrategias que potencien la productividad, la competitividad y la diversificación económica, consolidando al país como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial.

Fortalecimiento del sector privado como motor de crecimiento

El sector privado es el principal generador de empleo y dinamismo económico en el país. Sin embargo, para que pueda desempeñar su rol de manera eficiente, se requieren condiciones que incentiven la inversión y la expansión empresarial.

- **Ambiente de negocios propicio:** Simplificación y digitalización de trámites y permisos en el aparato Estatal (incluyendo gobiernos locales).
- **Acceso a financiamiento:** Es necesario fortalecer e innovar los mecanismos de crédito para empresas, especialmente para aquellas en etapas de crecimiento, de modo que puedan expandirse y generar más empleos.
- **Atracción de inversión extranjera:** Panamá debe seguir posicionándose como un destino seguro y rentable para la inversión, ofreciendo incentivos claros y estabilidad para los inversionistas.

Panamá como plataforma estratégica para negocios

La posición geográfica de Panamá y su infraestructura logística avanzada le han permitido consolidarse como un hub de comercio, transporte y servicios. Sin embargo, la creciente competencia en la región exige que el país continúe desarrollando su plataforma estratégica para mantener su liderazgo.

- **Optimización de la infraestructura logística:** Es necesario continuar modernizando puertos, aeropuertos y corredores logísticos para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.
- **Diversificación del sector logístico:** Mantener las inversiones en zonas económicas especiales, centros de distribución y el desarrollo de la industria 4.0 permitirá maximizar el valor agregado de los servicios logísticos.
- **Fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales:** La estabilidad y el crecimiento económico del país dependen en gran medida de su capacidad para mantener relaciones internacionales sólidas. En este sentido, la relación con Estados Unidos, como uno de los principales socios comerciales e inversores en Panamá, representa una oportunidad clave para posicionar al país como un aliado estratégico en el comercio global.

Las recientes diferencias sobre el Canal de Panamá han puesto en evidencia la importancia de fortalecer la comunicación y la cooperación entre ambas naciones. Sin embargo, esta coyuntura también abre una ventana de oportunidad para que Panamá se posicione como un socio confiable y estable en la región. Una diplomacia económica activa permitirá fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos, facilitando la apertura de nuevos mercados y atrayendo mayor inversión extranjera directa.

Además, en un momento en que EE.UU. busca diversificar y fortalecer sus rutas comerciales, Panamá puede desempeñar un papel clave en la redefinición de sus corredores logísticos.

Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de conexión ideal entre América del Norte y América del Sur, facilitando el tránsito de mercancías de manera más eficiente. En este sentido, aprovechar las oportunidades que ofrece MERCOSUR puede consolidar a Panamá como un eje clave en la integración comercial regional, facilitando nuevas conexiones entre EE.UU., Sudamérica y el resto del mundo.

Solución al problema de la CSS

El sistema de seguridad social es un pilar fundamental para la estabilidad del país y su fuerza laboral, pero enfrenta desafíos de sostenibilidad financiera que requieren soluciones estratégicas y viables.

- **Sostenibilidad sin afectar la competitividad:** Se deben diseñar mecanismos que garanticen la viabilidad del sistema sin generar cargas excesivas para el sector productivo ni afectar la inversión y el empleo formal.
- **Diálogo público-privado:** La construcción de soluciones para la CSS debe realizarse con una visión integral, donde el sector privado participe en la identificación de medidas sostenibles y equitativas.
- **Flexibilización de esquemas de aportes:** La implementación de modelos más eficientes y sostenibles permitirá mantener la cobertura, facilitando la incorporación de empleos formales en la economía.

Productividad y capacitación de la mano de obra

El talento humano es uno de los factores clave para mejorar la competitividad empresarial y consolidar a Panamá como un destino atractivo para la inversión. La alineación entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral es esencial para garantizar el crecimiento del sector privado. Para lograrlo, es fundamental desarrollar estrategias que impulsen la empleabilidad de todos los segmentos de la población, con especial énfasis en los jóvenes que ingresan al mercado laboral.

Educación y formación adaptada a la demanda laboral:

Se debe fortalecer la enseñanza en habilidades técnicas, digitales y empresariales para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de empleo. La actualización constante de los planes de estudio es esencial para asegurar que la fuerza laboral responda a las necesidades de los sectores estratégicos.

- **Fomento de la cultura de productividad:** Programas de eficiencia laboral y capacitación continua ayudarán a elevar la competitividad de los trabajadores y empresas. La promoción de estándares internacionales de calidad y certificaciones especializadas contribuirá a mejorar la productividad de la mano de obra panameña.
- **Incentivos para la capacitación empresarial:** La inversión en formación debe ser promovida a través de esquemas de cofinanciamiento y beneficios fiscales para las empresas que prioricen el desarrollo de sus colaboradores.
- **Programas de empleabilidad juvenil:** Es necesario seguir dándole protagonismo a iniciativas que faciliten la transición de los jóvenes desde la educación hacia el mercado laboral. Programas de formación dual, pasantías remuneradas y alianzas entre el sector privado y el sistema educativo permitirán mejorar la inserción laboral de los jóvenes y reducir los índices de desempleo en este segmento.
- **Fomento del emprendimiento juvenil:** Además de generar empleo asalariado, es clave incentivar el emprendimiento entre los jóvenes. La creación de fondos de apoyo y mentorías empresariales fortalecerán el ecosistema emprendedor y abrirán nuevas oportunidades económicas para este grupo.

Políticas de desarrollo productivo

Para lograr un crecimiento económico sostenido, es esencial implementar estrategias que diversifiquen la matriz productiva del país, permitiendo una mayor generación de valor y una menor dependencia de sectores tradicionales.

- **Inversión en innovación y tecnología:** Fomentar la adopción de tecnología en industrias estratégicas permitirá mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas panameñas.
- **Incentivos para la industrialización y el desarrollo agroindustrial:** Apoyar la modernización de sectores productivos clave permitirá expandir la capacidad exportadora del país.
- **Fortalecimiento de encadenamientos productivos:** La creación de redes empresariales que integren a grandes compañías, pymes y startups permitirá una mayor diversificación y sostenibilidad del crecimiento.

Demandas del Sector Privado para un Entorno de Negocios Óptimo

Para que Panamá continúe consolidándose como un destino atractivo para la inversión, es fundamental mejorar las condiciones en las que operan las empresas.

La competitividad del país depende en gran medida de la facilidad para hacer negocios, la predictibilidad del entorno económico y la capacidad de las empresas para acceder a financiamiento y expandirse. El sector privado identifica una serie de áreas clave en las que se requiere avanzar para fortalecer el clima de inversión y fomentar la diversificación productiva.

Reducción de barreras burocráticas

Uno de los principales desafíos para el sector empresarial sigue siendo la burocracia, que ralentiza la creación y expansión de negocios. La modernización y digitalización de los procesos administrativos permitirían reducir los tiempos y costos asociados a la apertura de empresas, facilitando así el emprendimiento y la inversión.

Es necesario eliminar la duplicidad de requisitos en distintas entidades y establecer mecanismos de coordinación que agilicen la gestión de permisos y trámites. La simplificación del marco regulatorio no solo hará más eficiente la operación de las empresas, sino que también incentivará la formalización de nuevas iniciativas empresariales.

Estructura fiscal competitiva

Panamá debe mantener una estructura fiscal que promueva la inversión y facilite la expansión de las empresas. La estabilidad tributaria es esencial para generar confianza entre inversionistas nacionales e internacionales, evitando cambios abruptos que afecten la planificación empresarial. Asimismo, un sistema tributario más eficiente y simplificado permitiría reducir la carga administrativa y mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se deben evaluar incentivos estratégicos que impulsen la inversión en sectores clave, promoviendo la diversificación productiva y el crecimiento sostenido del país.

Mejorar la fertilidad del entorno económico para facilitar la diversificación de la matriz productiva

Para garantizar un crecimiento económico sostenible, Panamá debe fomentar un entorno propicio para la diversificación productiva. Actualmente, el país depende en gran medida de sectores tradicionales como la logística y los servicios financieros, lo que hace necesario desarrollar nuevas industrias que generen empleo y fortalezcan la economía. Políticas que incentiven la inversión en tecnología, manufactura, agroindustria y otras áreas de alto potencial permitirán ampliar la base productiva del país y reducir su vulnerabilidad ante cambios en el mercado global. Asimismo, la inversión en infraestructura turística puede desempeñar un papel clave en la diversificación económica, ya que el turismo no solo impulsa la llegada de visitantes, sino que también genera una demanda creciente de bienes y servicios locales.

La expansión y modernización de aeropuertos, puertos de cruceros, centros de convenciones y corredores turísticos permitirá integrar a más sectores en la economía, creando cadenas de valor que beneficien a la agroindustria, la gastronomía, la artesanía, el comercio y los servicios de transporte.

Adicionalmente, el fortalecimiento de destinos turísticos emergentes en el interior del país permitirá generar oportunidades económicas en comunidades que tradicionalmente han dependido de sectores menos dinámicos. La inversión en ecoturismo, turismo rural y turismo cultural fomentará el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, incentivando la creación de empleo y la generación de valor agregado en regiones con potencial turístico.

La disponibilidad de financiamiento para proyectos innovadores y la creación de encadenamientos productivos fortalecerán la competitividad empresarial y la integración de las empresas locales en mercados internacionales.

Con una estrategia de diversificación bien estructurada, Panamá puede posicionarse como un país con múltiples motores de crecimiento económico, garantizando estabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

Políticas para MIPYMES

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) desempeñan un rol fundamental en la economía panameña, pero enfrentan dificultades para acceder a financiamiento y competir en igualdad de condiciones.

Es necesario implementar políticas que faciliten su crecimiento y consolidación, con programas de crédito accesibles y esquemas que reduzcan las cargas administrativas que limitan su desarrollo. La capacitación y asistencia técnica en áreas como digitalización, gestión empresarial y exportación permitirán mejorar la competitividad de las MIPYMES y potenciar su participación en la economía nacional.

Esquemas de garantías

En este contexto, los esquemas de garantías juegan un papel clave para mejorar el acceso a financiamiento y reducir el riesgo para inversionistas y emprendedores.

La creación de fondos de garantía específicos facilitará el crédito empresarial, permitiendo que más empresas puedan expandirse sin la necesidad de presentar colaterales elevados. Además, se deben establecer mecanismos de respaldo financiero para incentivar la inversión en sectores estratégicos y facilitar el acceso a mercados internacionales. Un entorno financiero más dinámico y accesible contribuirá significativamente a la expansión del tejido empresarial panameño.

Conclusión: Construyendo Puentes para un Panamá Próspero

Panamá tiene el potencial para consolidarse como un destino altamente competitivo para la inversión y los negocios, pero para ello es necesario continuar fortaleciendo el entorno económico y empresarial. La construcción de un clima de negocios más dinámico, con menos barreras burocráticas, una estructura fiscal competitiva y políticas que impulsen la productividad y la diversificación, permitirá que el sector privado siga siendo el motor del crecimiento y la generación de empleo en el país.

Desde el CoNEP, reafirmamos nuestro compromiso con la facilitación del diálogo y la cooperación estratégica entre el sector privado y el sector público. Como puente entre ambos sectores, continuaremos promoviendo iniciativas que permitan mejorar la competitividad del país y consolidar a Panamá como un referente regional para la inversión y el desarrollo empresarial.

El 2025 representa una oportunidad para fortalecer la posición de Panamá en la economía global y potenciar sectores clave que aseguren un crecimiento sostenible. El sector privado está listo para asumir el reto y contribuir activamente al desarrollo del país. Invitamos a inversionistas, empresarios y actores clave del ecosistema productivo a sumarse a esta visión y a ser parte del crecimiento de Panamá.



PERSPETIVAS PARA 2025: COLOCAR PORTUGAL NUMA ROTA DE CRESCIMENTO ACELERADO



Armindo Monteiro

Presidente de la Confederación Empresarial de Portugal-CIP



Colocar a economia portuguesa numa rota de crescimento acelerado, alicerçado em aumentos da produtividade, é o desígnio que está na base do trabalho da CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

O objetivo de atingir, em 2028, um valor não inferior a 75% da média da produtividade europeia (inscrito no Acordo Tripartido subscrito em outubro de 2024) é um desafio para as empresas, mas exige políticas públicas que criem condições favoráveis para que se concretize.

Só com empresas mais produtivas será possível competir nos mercados externos, crescer mais, com melhores empregos, com salários mais elevados.

A produtividade das empresas passa pelo investimento: mais investimento e melhor investimento. Passa também pelo capital humano, que é o seu principal ativo. Uma das prioridades é a redução da carga fiscal sobre as empresas e sobre o trabalho, com o objetivo de favorecer o investimento e a retenção de talento em Portugal.

Quanto a medidas concretas dirigidas às empresas, para além da redução gradual da taxa da IRC, é preciso eliminar, também gradualmente, os elementos da tributação das empresas que não encontram paralelo nos sistemas fiscais dos nossos concorrentes europeus, nomeadamente a derrama estadual e as tributações autónomas. A CIP destaca ainda, entre as suas propostas, a isenção de tributação em IRC dos lucros que sejam destinados ao investimento e à capitalização das empresas. Outra prioridade deverá ser a da simplificação administrativa, melhorando o ambiente regulatório das empresas, por forma a diminuir significativamente os custos de contexto, absorventes de energias, tempo e recursos, e que condicionam a produtividade e a competitividade das empresas. Nesta frente, é necessário pôr urgentemente em ação um Programa Simplex Empresas para desburocratização intensiva das suas relações com as entidades públicas.

É preciso também criar um regime geral de taxas, eliminando as que não têm contrapartida de serviço público e reduzindo as que não respeitam o princípio da proporcionalidade. A CIP retém ainda como prioritária a supressão do regime especial aplicável à Autoridade Tributária em matéria de litigância de má-fé, equilibrando, neste domínio, a relação entre o Estado e as empresas.

Finalmente, a CIP espera determinação no compromisso do Governo para recuperar os atrasos que se arrastam na execução do PRR e do Portugal 2030. O grande desafio será conciliar estas políticas públicas mais favoráveis ao aumento da produtividade com a sustentabilidade das finanças públicas, por forma a continuar a reduzir a dívida pública, numa dinâmica positiva. Daí, também, a necessidade de melhorar a eficiência e a eficácia com que o Estado gere os seus recursos – os que vêm dos impostos que cobra e os que nos são disponibilizados pela União Europeia.

Tabela 1: Principais Indicadores Macroeconómicos - Portugal

Indicadores - Taxa de variação anual em %, exceto onde indicado	2025 (p)
PIB real	2.2
Consumo Privado	2.7
Consumo Público	1.1
Investimento (FBCF)	5.4
Exportações	3.2
Importações	4.7
Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor	2.1
Dívida pública (% do PIB)	86.5
Taxa de Desemprego (% pop. ativa)	6.4
Emprego	0.8
Produtividade aparente do trabalho	1.4

O impacto do contexto europeu no desígnio do crescimento

O contexto nacional é naturalmente muito afetado pelo que se passa na União Europeia. Se queremos crescer a um ritmo mais acelerado, precisamos também de um contexto favorável a nível europeu. Uma das principais causas da falta de produtividade europeia é a falta de inovação. Ideias brilhantes não nos faltam. Mas a Europa precisa de ser mais eficaz a capitalizar a sua excelente base científica em prol da inovação, e levar as suas ideias ao mercado. A nossa capacidade para inovar será um elemento crucial para recuperarmos competitividade e para conseguirmos, passo a passo, ir fechando o enorme gap que nos afasta dos nossos grandes concorrentes a nível mundial. A indústria europeia aumentou o seu investimento em investigação e desenvolvimento em 9,8 % em 2023, ultrapassando o crescimento do investimento empresarial em I&D nos EUA (+5,9 %) e na China (+9,6 %) pela primeira vez desde 2013. A UE também ficou em segundo lugar a nível mundial no investimento privado em I&D.

São sinais positivos, mas será preciso muito mais. Dando seguimento à influência europeia no crescimento económico nacional, o contexto onde operam as empresas portuguesas será determinado pelas outras prioridades europeias como a reindustrialização e mobilidade de emissões nulas, a transição energética, o reforço da indústria europeia de Defesa, as novas medidas com vista à melhoria da competitividade europeia (como um regime fiscal uniformizado para as empresas, um regime específico do IVA para as PME) e a resposta europeia a conflitos comerciais.

Vemos, assim, com importância redobrada esta nova vontade política de simplificar o funcionamento da União Europeia e de apostar na sua competitividade, congratulando os Relatórios apresentados por Enrico Letta e Mario Draghi, cuja influência e frutos já se começam a ver em recentes iniciativas europeias.

Efetivamente, a Presidente Ursula von der Leyen já começou a apresentar novas orientações que vão de encontro às propostas apresentadas nestes dois relatórios. Importa agora passar para medidas concretas e a sua implementação, que deve ser feita de forma célere e consequente.



VISIÓN DE COPARDOM SOBRE LOS RETOS Y EXPECTATIVAS PARA 2025



Laura Peña

Presidenta de la Confederación Patronal de República Dominicana - Copardom



Los problemas y desafíos abundan en una región donde más de 650 millones de personas conviven en 35 territorios con una marcada desigualdad en múltiples niveles. Más allá de la diversidad de situaciones, los países de América Latina presentan rasgos comunes:

- La mayoría de los países latinoamericanos lograron avances considerables en décadas pasadas, aunque aún persisten desafíos para su desarrollo.
- Una mejor gestión económica, sumada a una coyuntura favorable, permitió en el pasado un vigoroso crecimiento económico.
- La mejora económica facilitó políticas sociales que impactaron positivamente en la reducción de la pobreza.

Aun así, quedan obstáculos por superar para establecer un crecimiento económico sostenible y garantizar un desarrollo duradero.

Actualmente, a nivel regional, el crecimiento es débil, lo que genera importantes retos que priorizamos en tres ejes de oportunidad para nuestras sociedades:

1. Fortalecimiento de los sistemas democráticos como garantes del Estado de derecho para todos.
2. Reducción de las desigualdades sociales en la región.
3. Preservación del medioambiente, fomentando el desarrollo sostenible.

En otras palabras, el principal reto actual de los países latinoamericanos es reconstruir un espacio de coordinación que permita enfrentar sus principales amenazas: el cambio climático, las desigualdades sociales y las involuciones autoritarias. Democracia y crecimiento económico son condiciones esenciales para alcanzar un desarrollo pleno a través de la libre empresa y el empleo.

Para todos en la región, es fundamental reducir la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos, mediante la distribución equitativa de recursos, la inversión en educación, el desarrollo de competencias, la aplicación de medidas de protección social, la lucha contra la discriminación, el apoyo a los grupos marginados y el fomento de la cooperación internacional para lograr un comercio y sistemas financieros justos.

Situación de la República Dominicana

En el ámbito nacional, el crecimiento que ha experimentado la República Dominicana en las últimas décadas ha transformado su perfil social y económico. Hoy, en los ejes social, laboral y económico, el país presenta condiciones muy distintas a las existentes a finales de los años 2000.

La República Dominicana cerró el 2024 con un alto crecimiento, inflación controlada y metas de empleo alcanzadas. Puntualmente, el PIB creció un 5.0 %, la inflación interanual se situó en 3.35 % y se generaron poco más de 140,000 empleos formales, lo que redujo la tasa de desempleo a 5.3 %.

No obstante, en 2025, la economía dominicana operará en un contexto internacional marcado por alta volatilidad, riesgos geopolíticos e incertidumbre sobre las políticas económicas, comerciales y migratorias del nuevo gobierno del presidente Trump.

Los riesgos geopolíticos globales representan un desafío para la República Dominicana, principalmente por su impacto en el alza de commodities como el petróleo.

Sin embargo, la cercanía con su principal socio comercial y los avances en la diversificación de la producción y las exportaciones brindan una oportunidad para adaptarse mejor al nuevo entorno global. En este escenario, el nearshoring surge como una estrategia para aprovechar la proximidad geográfica y fomentar el intercambio comercial.

Según el Índice de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard (ECI), que mide la capacidad productiva de 145 países con base en su diversidad y ubicuidad, la República Dominicana mejoró significativamente su posición, pasando del puesto 97 en el año 2000 al 63 en 2022, superando a varias naciones de la región.

Revisión legislativa y modernización del Código de Trabajo

El país está inmerso en un proceso tripartito para actualizar el Código de Trabajo, vigente desde 1992. Enfrentamos desafíos que requieren una adaptación urgente de la normativa laboral para responder a las necesidades del siglo XXI.

El Código de Trabajo fue en su momento un instrumento valioso para regular las relaciones laborales en un contexto muy distinto al actual, caracterizado por mercados cerrados, incentivos arancelarios y baja competencia internacional. Sin duda, esta legislación contribuyó a la paz laboral y garantizó los derechos de los trabajadores en una época en la que no existía un sistema de seguridad social integral y universal.

Hoy, para fomentar el desarrollo, la inversión y el empleo, es necesario modernizar los procedimientos laborales, las jornadas y los costos asociados a las relaciones de trabajo. Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha sido un referente en crecimiento económico sostenido en la región, con tasas promedio del 5.3 % anual, según datos del Banco Central.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para resolver problemas de productividad, equidad social y sostenibilidad ambiental.

COPARDOM, al igual que otras organizaciones empleadoras, debe aprovechar la coyuntura para impulsar reformas en educación, infraestructura resiliente y energías limpias. Hoy, como nación, tenemos la oportunidad de convertirnos en un referente regional en desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, esto requiere un liderazgo visionario, que trascienda la política tradicional y actúe como agente de cambio.

El reto de la productividad y la educación como clave del desarrollo

Uno de los principales desafíos del país es la baja productividad, la cual varía entre sectores y actividades productivas, y no está alineada con los niveles de desarrollo esperados. Esto limita la competitividad en un mercado global que exige innovación y eficiencia.

El desarrollo no depende únicamente de los recursos, sino también de instituciones que fomenten el cambio. En este contexto, la educación debe convertirse en una herramienta clave para la movilidad social y la generación de valor.

Es crucial encontrar un equilibrio entre las necesidades de los empleadores, que requieren un marco flexible que promueva la inversión y la creación de empleos formales, y los derechos de los trabajadores, que deben estar protegidos y garantizados.

El 2024 fue un año en el que se enfrentaron adecuadamente los desafíos globales. Para el 2025, a pesar de un entorno retador, mantenemos perspectivas positivas gracias al fortalecimiento de sectores clave, el dinamismo de la inversión extranjera y las oportunidades que brinda nuestra ubicación estratégica.

El sector turístico seguirá siendo una fuente importante de ingresos, empleo y cohesión social, debido a su alto efecto multiplicador del gasto.

Aspiramos a seguir impulsando la inclusión social, el empleo formal y las reformas necesarias para modernizar nuestros paradigmas. Estamos comprometidos con un liderazgo nacional que, a través de las organizaciones de empleadores, gestione el presente y diseñe un futuro próspero, inclusivo y sostenible para todos.

PROPUESTAS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR



De cara a un nuevo año, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), reafirma su compromiso con el crecimiento del sector manufacturero. En este marco acercó propuestas a las nuevas autoridades del gobierno nacional, las que asumirán el próximo 1° de marzo, que buscan apalancar la industria con foco en la mejora de la competitividad.



Durante 2024, la CIU compartió a candidatos a la presidencia de la República, el Plan de acción para el desarrollo industrial de Uruguay, con más de 90 propuestas para impulsar a la industria uruguaya, los que se dividen en seis ejes temáticos: competitividad, exportación, sostenibilidad, innovación, emprendedurismo y capacitación.

Actualmente, en el período de transición hacia un nuevo gobierno nacional, el Consejo Directivo de la institución continúa transmitiendo dichas ideas con el objetivo de acercar la realidad industrial y contribuir a la construcción de políticas públicas que contemplen las necesidades y oportunidades del sector.

La industria en Uruguay

El sector genera más de 165.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos, lo que representa un 15% del empleo total del país. Además, hay que tener en cuenta que contribuye con un 10% al Producto Interno Bruto (PIB) total, lo que es importante ya que una industria sólida puede incidir en un PIB per cápita más elevado y una mayor estabilidad económica. Es por ello que las iniciativas impulsadas desde las cámaras empresariales en los ecosistemas productivos con llegada a todas las empresas nacionales, independientemente de su tamaño y ubicación geográfica, son relevantes para la población toda, generando efectos multiplicadores y expansivos de los instrumentos disponibles.



Oportunidades para el sector que mejoran la competitividad

Entre las principales preocupaciones de la industria se encuentra la competitividad. En ese sentido, consideran que el proceso debe ser encarado con una mirada de mediano y largo plazo y con la participación tanto del sector público como privado. El vector Industria Competitiva ofrece soluciones concretas y un camino de crecimiento para el sector manufacturero.

Se destacan como medidas en el ámbito macroeconómico fortalecer la estabilidad fiscal y promover un crecimiento sostenible, reduciendo y manteniendo el gasto público del Gobierno Central en el entorno al 20% del PIB.

Otra iniciativa es perfeccionar la regla fiscal, lo que implica establecer criterios para modificar y establecer metas fiscales y distinguirlas de las proyecciones fiscales. Además, se plantea desindexar las tarifas y precios del Estado e Intendencias, lo que contribuirá a reducir la inflación y mejorar la competitividad de los productos y servicios nacionales.

En cuanto a los aspectos de Empleo y Relaciones Laborales, el plan comenta propuestas para establecer la negociación tripartita exclusivamente para acordar el salario mínimo por rama de actividad, garantizando así un proceso transparente y representativo de los diferentes intereses.

También se comparten planteos sobre las negociaciones bipartitas y se afirma que la negociación salarial actual perjudica a las empresas Micro, pequeñas y medianas (Mipymes) del interior ya que están obligadas a pagar salarios mínimos superiores a sus niveles de productividad.

Para corregir esta falla, recomiendan reformular los ámbitos de negociación colectiva, de forma de contemplar distintas realidades, considerando la ubicación geográfica y el tamaño de las empresas, exceptuando a las empresas grandes. Además, hacen foco en modernizar la normativa laboral. Otro punto esencial para mejorar la competitividad es abaratar los costos energéticos, como el precio de los combustibles, y revisar el monto de los peajes por distribución/transmisión de energía eléctrica, favoreciendo la proveeduría de energía entre privados.

Asimismo, plantean que se continúen repitiendo experiencias de ofertas de UTE para horarios especiales. Consideran crucial evaluar la definición de tarifas de la energía, considerando sistemas de precios nodales o diferentes del actual. En referencia al Hidrógeno Verde, el país cuenta con ventajas competitivas importantes para ser un productor relevante de hidrógeno verde y derivados, tanto para el mercado local como para la exportación. En este marco, creen necesario reglamentar la legislación vigente y generar un nuevo marco normativo para favorecer la industria de hidrógeno verde y sus derivados.

Respecto a la gestión de las empresas públicas proponen la introducción de buenas prácticas de gobierno corporativo y la apertura de capitales en el mercado de valores. Finalmente, sugieren otorgar a los órganos reguladores una mayor autonomía técnica y capacidad sancionatoria para mejorar la gestión y supervisión de las empresas públicas.

Sobre el Sistema Tributario, el documento detalla que es importante dejar de gravar con Impuesto al Patrimonio las materias primas adquiridas en el extranjero que están pendientes de pago y abogan por la reinstauración del cómputo de las pérdidas por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

A su vez, esperan que se introduzcan modificaciones al sistema tributario que fomenten la inversión y las exportaciones, así como mejorar los incentivos tributarios para los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de las empresas.

Las iniciativas relacionadas con las regulaciones y fiscalización se centran en el combate al contrabando, a través del fortalecimiento del control del contrabando en frontera, especialmente durante los períodos de atraso cambiario en el país o desfases cambiarios en países vecinos. Otro punto sustancial para la ciudadanía en general y que repercute en la industria es la seguridad, por lo que llaman a intensificar el patrullaje policial en zonas donde están emplazadas las plantas industriales.

En tanto, llaman a continuar promoviendo la política del Componente Nacional de la Inversión, así como fortalecer el instrumento de Compras Públicas.

Una industria sostenible, exportadora, innovadora, emprendedora y capacitada

Además del eje Industria Competitiva, el Plan promueve otras aristas que hacen a la realidad industrial como son la sostenibilidad, exportación, innovación, capacitación y emprendedurismo.

Entienden que el surgimiento de nuevos emprendimientos enriquece el entramado industrial, sumando nuevas generaciones a la actividad del sector, con productos caracterizados por la diferenciación y llegada a nichos de mercado de alto valor agregado.

Por ello, dentro del vector Industria Emprendedora, las propuestas se vinculan a la construcción de espacios asociativos que generen sinergias productivas y comerciales, facilitando así el escalamiento de los negocios. Además, creen que sería beneficioso crear un fondo de apoyo a emprendedores industriales, la revisión de los umbrales para la categorización de Mipymes industriales,

introducir cláusulas especiales en los acuerdos de los Consejos de Salarios y que se implemente mayor gradualidad en los aportes de pagos de impuestos, cargas sociales y anticipos a la importación.

Desarrollo competitivo de las Mipymes industriales

Otro insumo fundamental para el crecimiento de la industria nacional, centrado en las Mipymes, es el Documento de intención para el desarrollo competitivo de las Mipymes de Uruguay, el que fue elaborado en el marco de Primer Foro Mipyme de Uruguay, organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas y la CIU.

Su contenido surge de una jornada de diálogo público-privado en las temáticas centrales de la competitividad empresarial: factores tecno-productivos, ventas en el mercado interno, exportaciones, acceso al financiamiento y regulaciones.

Los diversos actores pusieron énfasis en la conveniencia de implementar instancias de análisis y mejora de los instrumentos existentes, con el fin de aumentar su capacidad de respuesta a las necesidades de las empresas, con mirada territorial.

Asimismo, se hizo hincapié en la dificultad de acceso a la información de los instrumentos disponibles, planteándose como requerimiento la adaptación de estrategias de comunicación para llegar a las empresas de todo el país.

Valoraron especialmente este encuentro interinstitucional, destacándose la necesidad de continuar propiciando espacios de diálogo público - privado para abordar temas de interés y generar propuestas de mejora.

De esta forma, CIU reafirma su compromiso con la industria y el país, aportando propuestas y realizando acciones en pro del presente de todos y por el bienestar de las futuras generaciones.

Encontrá el Plan de acción para el desarrollo industrial de Uruguay completo y el Documento de intención para el desarrollo competitivo de las Mipymes de Uruguay en su web www.ciu.com.uy.



PRIORIDADES SOCIOECONÓMICAS Y DEMANDAS DEL SECTOR PRIVADO EN URUGUAY 2025



Desde la recuperación de la democracia en 1985, Uruguay ha alcanzado importantes avances con relación a su institucionalidad política y desarrollo económico-social.

Actualmente, el país exhibe un sistema democrático consolidado, un Estado de Derecho sólido y una economía más abierta y estable. Sin embargo, aún persisten desafíos significativos en términos de competitividad, productividad y así como en modernización de la institucionalidad económica, los cuales se entiende que deben ser abordados con urgencia para consolidar un desarrollo sostenible durante el año 2025 y siguientes.

La estabilidad macroeconómica ha sido un logro relevante en las últimas décadas. Uruguay ha avanzado en la gestión fiscal y monetaria, logrando mejoras en la calificación crediticia y la reducción del riesgo país. La inflación, que se encuentra ubicada en el rango meta del Banco Central del Uruguay desde junio del año 2023, es una muestra del progreso alcanzado, generando mayor previsibilidad para los empresarios.

No obstante, es crucial consolidar la institucionalidad fiscal, reduciendo el gasto público, el déficit fiscal y el endeudamiento. Además, el sector privado señala la urgencia de enfrentar los problemas de competitividad sistémica intrínsecos en el funcionamiento de la economía, los cuales afectan los niveles de productividad de las empresas y por lo tanto sus posibilidades de insertarse exitosamente en los mercados internacionales.

Bajo esta realidad, la promoción de la competencia sigue siendo un desafío pendiente. Persisten barreras regulatorias que limitan el desarrollo de sectores claves de la economía como lo es la energía, el transporte, alimentos, insumos industriales, encareciendo los costos para empresas y consumidores.

Es imperativo liberar la importación, comercialización y distribución de combustibles, simplificar los procesos de importación de insumos críticos y bienes de consumo, y fortalecer la institucionalidad de defensa de la competencia y del consumidor.

Estas acciones, además de beneficiar al consumidor, contribuirían a estimular el crecimiento económico, fomentar la inversión en el sector privado, y de esta forma promover la generación de fuentes genuinas de trabajo de calidad.

En términos de apertura comercial, aunque Uruguay ha diversificado exportaciones y mercados, la falta de acuerdos comerciales con la mayoría de sus socios limita las condiciones de acceso preferenciales en los principales mercados de consumo. Para revertir esta situación, es fundamental acelerar los procesos de negociaciones internacionales, incluyendo tantos acuerdos dentro del marco del Mercosur como fuera de la región.

En particular, los últimos pasos dados en la cumbre del Mercosur, celebrada el pasado 6 diciembre del año 2024 respecto a la firma del Acuerdo Mercosur – Unión Europea (aunque aún pendiente de ratificación), el cual engloba aspectos de comercio, política, cooperación y desarrollo sostenible, son una clara oportunidad de reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, que redunden en un aumento de los flujos de comercio y de inversiones entre ambos bloques, así como reales oportunidades de crecimiento y transformación para las empresas.

En este sentido, resulta clave continuar desarrollando estrategias de inserción internacional tanto en materia de bienes como servicios. A modo de ejemplo, se insiste en poder lograr la adhesión al CPTPP (Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico), avanzar en la firma de nuevos acuerdos de servicios, pero también continuar en la búsqueda de nuevas aperturas sanitarias y fitosanitarias en determinados productos exportados, como por ejemplo lo que refiere a la certificación Halal en los diferentes mercados árabes.

Pero en materia de apertura comercial y en particular para una economía pequeña como la uruguaya, también resulta clave avanzar en la flexibilización de las corrientes de bienes que ingresan al país, tanto de insumos para diferentes procesos productivos, como de bienes para consumo final.

Y allí existe una importante agenda de trabajo por conformar y avanzar, y nuevamente no sólo referente a cuestiones arancelarias sino también no arancelarias. A modo de ejemplo, en el caso de los productos textiles, éstos actualmente están gravados con un arancel de importación promedio del 20% y por su parte el calzado se encuentra gravado con un arancel de importación promedio del 27.3%.

A este arancel, además, para el caso de productos fuera del Mercosur se le debe sumar el 5% de la tasa consular. A modo de referencia, en el caso de Chile, el arancel promedio que se cobra fuera del marco de los acuerdos preferenciales es del 6% (en Uruguay el cobro de la tasa consular ya casi alcanza a ese valor), mientras que, considerando la totalidad del comercio, es decir también aquel cubierto por acuerdos de libre comercio, el arancel efectivo ponderado en Chile es menor al 1%. La modernización del marco laboral es otra prioridad para el sector privado uruguayo.

La regulación vigente, que afecta especialmente a mujeres, jóvenes y personas con baja educación formal, requiere una actualización sustancial. Es necesario seguir adecuando la negociación salarial para adaptarla a las realidades de cada empresa (tamaños de empresa, localización geográfica), modernizar las categorías laborales, flexibilizar aspectos referentes a la organización del tiempo del trabajo (horarios de jornadas, descansos intermedios, licencias),

así como también consagrar a la negociación tripartita únicamente para la definición de los mínimos salariales por categoría, dejando así a la negociación de ajustes salariales, mediciones de productividad y condiciones de trabajo, en el marco de la negociación bipartita.

Estas reformas, permitirán una mayor inclusión laboral y una adaptación más eficiente del mundo del trabajo a las necesidades actuales de los mercados, logrando así mejoras sustanciales en términos competitividad. Por estos motivos, es necesario crear políticas públicas que consagren la definición de “empresas sostenibles”, a efectos de evitar que cierren empresas por establecer costos, impuestos y objetivos de salario real inalcanzables.

A nivel de empleo juvenil, existe un problema estructural en donde los jóvenes representaron el único grupo etario que no recuperó los niveles de empleo previos a la pandemia, ocasionando dificultades en materia de empleabilidad dada las escasas ocupaciones a las que se les permite acceder por su bajo nivel de formación y experiencia laboral.

La eficiencia del Estado y su interconexión con las diferentes actividades económicas también resulta clave cuando se habla de competitividad y por lo tanto es una temática que se entiende que debe ser abordada. En la actualidad, el “aparato estatal”, representa una carga significativa para el sector privado.

Es imprescindible optimizar el uso de tecnologías para reducir la burocracia y personal estatal innecesario, bajar impuestos que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y simplificar los trámites operativos, así como los necesarios en los procesos de apertura y cierre de empresas. Un cambio de enfoque que priorice controles ex-post sobre permisos ex-ante, no sólo permitirá agilizar las actividades económicas sino también tender hacia una reducción de costos.

El combate al contrabando y el fomento de la formalidad son igualmente urgentes. Las actividades ilegales y por lo tanto la competencia desleal no sólo perjudican a los comercios establecidos, sino que también limitan los ingresos fiscales necesarios para implementar políticas públicas efectivas. Facilitar y promover los procedimientos de importación formales así como los controles en los pasos de frontera, y en contraposición reprimir las actividades fuera de la ley, son medidas esenciales para fomentar un comercio justo y equilibrado.

Bajo este marco, se destaca la importancia de apoyar en particular a las micro y pequeñas empresas: en Uruguay, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen el corazón del sector privado, representando más del 99% del total de empresas.

Particularmente en el sector Comercio y Servicios, estas empresas alcanzan el 85%, consolidándose como pilares de la economía nacional. Este sector no sólo genera el 70% del PIB, sino que también aporta el 83% de los puestos de trabajo privados, lo que subraya su relevancia para el desarrollo socioeconómico del país.

A pesar de su protagonismo, las MIPYMES enfrentan múltiples desafíos estructurales que limitan su crecimiento. Las barreras que encuentran a su paso se traducen en bajas tasas de supervivencia y escasas oportunidades de expansión dinámica. Si bien muchas empresas ingresan al mercado, la realidad es que su productividad suele ser insuficiente, llevándolas a estancarse o abandonar rápidamente el mercado.

En promedio, una de cada dos empresas en Uruguay cierra antes de tres años, un plazo significativamente más breve que el promedio de los países de la OCDE, donde la vida útil inicial de las empresas se extiende entre seis y siete años.

Ante esta situación, es esencial avanzar hacia un ecosistema más favorable para las MIPYMES. Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, se plantean diversas iniciativas para promover la competitividad y sostenibilidad de estas empresas, trabajando en conjunto con el sector público.

Una de las claves, tal como se mencionó, es avanzar hacia una gestión estatal más eficiente, acompañada de una política fiscal que priorice la reducción del gasto público sobre el aumento de impuestos y tarifas. El sistema tributario actual presenta serias complicaciones para las MIPYMES. Un ejemplo claro son los "impuestos ciegos" como el Impuesto al Patrimonio, que grava la riqueza sin considerar el desempeño económico de la empresa. Además, otros gravámenes como el IRAE, la imposición por dividendos fictos, y tasas desactualizadas afectan negativamente su desempeño. La Cámara aboga por un sistema fiscal gradual y flexible que facilite la formalización y el crecimiento sostenible.

Finalmente, la promoción de la igualdad de género y la equidad en el ámbito empresarial constituye también un pilar esencial para fortalecer el desarrollo socioeconómico de Uruguay. La equidad de género no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también un motor de competitividad. Actualmente, en Uruguay las mujeres representan el 55,8% de la fuerza laboral en las MIPYMES, sin embargo, menos del 11% ocupan cargos de liderazgo o dirección.

Esta disparidad pone de manifiesto la subutilización del talento femenino en los niveles estratégicos, limitando las oportunidades de innovación, diversidad de pensamiento y desarrollo sostenible del sector privado.

El desarrollo económico sostenible de Uruguay en 2025 y los años venideros exige un enfoque integrado que incluya la igualdad de género como eje transversal en todas las áreas de política pública y privada.

Un liderazgo empresarial inclusivo, combinado con reformas laborales y políticas públicas de apoyo, no sólo impulsará la competitividad de las empresas uruguayas, sino que también contribuirá a construir una sociedad más equitativa, resiliente y preparada para los desafíos globales.





PERSPECTIVAS DE NUESTRAS
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

JÓVENES EMPRESARIOS





Un Nuevo Horizonte para Inversiones y Desarrollo Empresarial

De cara a un nuevo ciclo económico, el mundo empresarial en Argentina se enfrenta a un escenario de desafíos, pero también de oportunidades. En el último año, el país ha mostrado señales de recuperación y estabilización, con un intento de ordenar las variables macroeconómicas y dar previsibilidad a los negocios.

A pesar de que seguimos atravesando una transformación económica tras una recesión prolongada, con los desafíos que eso implica —alta inflación, caída del consumo y una industria que aún siente el impacto— el panorama empieza a mostrar nuevas oportunidades.

El contexto actual también es un momento clave para adaptarse y crecer.

En medio de estos ajustes y cambios, el país está en una transformación económica que, a pesar de las dificultades, abre nuevas puertas. Con el crecimiento del PBI y la apertura de mercados, puede ser el momento perfecto para que los inversores, tanto locales como internacionales, apuesten por los sectores estratégicos que están listos para despegar, como la energía, la minería y la industria del conocimiento.

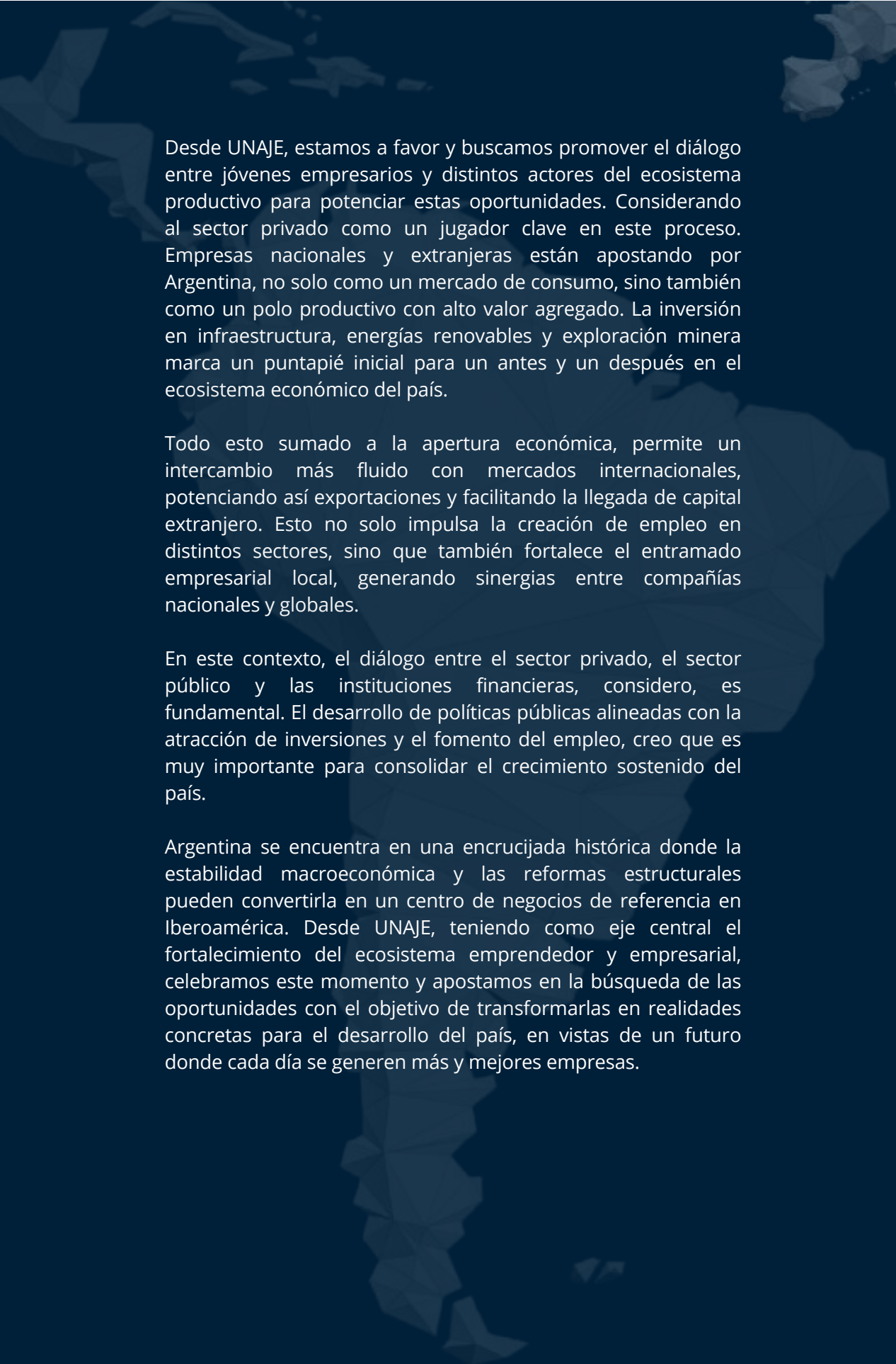
Creo que es el momento de tomar decisiones valientes, de sumarse al dinamismo que está transformando el futuro económico de Argentina. Para mí, este es un país con un increíble poder de adaptación, con profesionales y emprendedores que tienen un gran potencial, que siempre se caracterizaron por su capacidad de adaptación, resiliencia y creatividad.



Miguel Ippolito
Presidente de UNAJE Argentina

Es ahora cuando tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que Argentina puede ofrecer.

Históricamente reconocida por su potencial en la agroindustria y la industria del conocimiento, nuestro país va ampliando sus horizontes hacia puntos estratégicos como la energía y la minería. Estos sectores, que se ven impulsados por reformas estructurales y una creciente demanda global, ofrecen un nuevo campo de oportunidades para empresarios y compañías internacionales interesadas en la región.



Desde UNAJE, estamos a favor y buscamos promover el diálogo entre jóvenes empresarios y distintos actores del ecosistema productivo para potenciar estas oportunidades. Considerando al sector privado como un jugador clave en este proceso. Empresas nacionales y extranjeras están apostando por Argentina, no solo como un mercado de consumo, sino también como un polo productivo con alto valor agregado. La inversión en infraestructura, energías renovables y exploración minera marca un puntapié inicial para un antes y un después en el ecosistema económico del país.

Todo esto sumado a la apertura económica, permite un intercambio más fluido con mercados internacionales, potenciando así exportaciones y facilitando la llegada de capital extranjero. Esto no solo impulsa la creación de empleo en distintos sectores, sino que también fortalece el entramado empresarial local, generando sinergias entre compañías nacionales y globales.

En este contexto, el diálogo entre el sector privado, el sector público y las instituciones financieras, considero, es fundamental. El desarrollo de políticas públicas alineadas con la atracción de inversiones y el fomento del empleo, creo que es muy importante para consolidar el crecimiento sostenido del país.

Argentina se encuentra en una encrucijada histórica donde la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales pueden convertirla en un centro de negocios de referencia en Iberoamérica. Desde UNAJE, teniendo como eje central el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y empresarial, celebramos este momento y apostamos en la búsqueda de las oportunidades con el objetivo de transformarlas en realidades concretas para el desarrollo del país, en vistas de un futuro donde cada día se generen más y mejores empresas.



El sector privado en Ecuador: Motor de empleo, competitividad e inversiones en tiempos de transformación económica

Ecuador enfrenta desafíos económicos significativos, pero también oportunidades únicas para impulsar el desarrollo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el desempleo se situó en 4,47% en 2024, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 58%, afectando a más de la mitad de la población económicamente activa.

En este escenario, el sector privado ha emergido como un actor clave, promoviendo iniciativas que dinamizan la economía y atraen inversiones.

Uno de los mayores retos es la creación de empleo formal, especialmente para jóvenes y grupos vulnerables. Datos del INEC revelan que el 24,6% de los jóvenes entre 18 y 29 años no estudia ni trabaja, lo que refleja una brecha importante en oportunidades.

Para abordar este problema, empresas privadas, cámaras de comercio e industrias, con el respaldo de instituciones académicas, han impulsado programas de inserción laboral, como capacitaciones técnicas y ferias de empleo, que han conectado a miles de personas con oportunidades laborales. Estas iniciativas han demostrado ser efectivas para reducir parcialmente la brecha de acceso al mercado formal.

En cuanto a competitividad, Ecuador ocupa el puesto 91 en el Índice de Competitividad Global 2024, publicado por el Foro Económico Mundial, lo que evidencia la necesidad de mejorar en áreas como infraestructura, innovación y logística.



Pablo Andrés Vintimilla

Presidente de AJE Ecuador

Sectores como la agroindustria han dado pasos importantes: las exportaciones de banano, camarón, cacao y flores sumaron más de 7.083 millones de dólares en 2024, según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Sin embargo, las pymes, que representan el 90% del tejido empresarial, enfrentan barreras como el acceso a financiamiento y los altos costos logísticos. Para superar estos obstáculos, el sector privado ha promovido alianzas público-privadas y reformas regulatorias que simplifiquen trámites y reduzcan costos.

La atracción de inversiones es otro pilar fundamental.

Entre enero y septiembre de 2024, Ecuador recibió 217,4 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), lo que representa una disminución del 30% en comparación con el mismo período de 2023, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Esta tendencia decreciente plantea un desafío para la economía nacional, que requiere mayor inversión extranjera para impulsar el desarrollo y la generación de empleo. Ante este panorama, el sector privado enfatiza la necesidad de mayor estabilidad jurídica, reglas claras y transparencia para fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar a Ecuador como un destino atractivo para el capital extranjero.

El diálogo entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil ha sido esencial para avanzar en estas áreas. Los espacios de colaboración público-privada han permitido identificar y abordar barreras estructurales, promoviendo políticas que beneficien a todos los actores económicos. Por ejemplo, se han discutido propuestas para flexibilizar los contratos laborales y fomentar la formalización del empleo, aunque estas iniciativas han generado debates sobre la protección de los derechos laborales. El sector privado ha abogado por medidas que equilibren la flexibilidad laboral con la seguridad social, argumentando que son necesarias para reducir el desempleo y la informalidad.

Un factor adicional que influirá en el panorama económico es el contexto político. En 2025, Ecuador celebrará elecciones presidenciales, lo que podría generar incertidumbre en el corto plazo, pero también abrir oportunidades para reformas que impulsen el empleo, la competitividad y las inversiones. El sector privado tendrá un rol clave en este proceso, promoviendo políticas que fomenten la estabilidad y el crecimiento.

En conclusión, el sector privado en Ecuador está desempeñando un papel protagónico en la generación de empleo, la mejora de la competitividad y la atracción de inversiones. Con cifras que reflejan tanto avances como desafíos, el país tiene la oportunidad de construir un futuro más próspero y sostenible. Para lograrlo, es imprescindible continuar fortaleciendo el diálogo y la colaboración entre todos los actores económicos, asegurando que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los ecuatorianos.



Juventud Empresaria, futuro.

El sector privado es el verdadero motor de la economía española. A través del emprendimiento, la innovación y la inversión, las empresas generan riqueza, empleo y oportunidades que permiten el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, en un entorno marcado por desafíos como la digitalización, la transición ecológica, la burocracia y la inestabilidad regulatoria, es imperativo que las instituciones y el tejido empresarial trabajen en conjunto para crear un marco que favorezca la actividad empresarial y el crecimiento.

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), representamos a más de 18.500 jóvenes empresarios y defendemos la idea de que la empresa es la mayor herramienta de transformación económica y social. Nuestra apuesta es clara: más empresas, menos trabas y mejores condiciones para los emprendedores.

El desempleo, especialmente el de los jóvenes, sigue siendo un reto estructural en España. Según los últimos datos del INE, la tasa de desempleo juvenil supera el 28%, lo que indica que muchos jóvenes siguen sin encontrar su lugar en el mercado laboral. Frente a este problema, el sector privado desempeña un papel crucial. Para generar más empleo, es fundamental fomentar el emprendimiento desde la educación, reducir las cargas fiscales y simplificar la burocracia para crear y gestionar negocios. En este sentido, CEAJE impulsa medidas concretas ante las instituciones europeas y nacionales para eliminar barreras al emprendimiento. Necesitamos un marco normativo más flexible que incentive la contratación y permita a las empresas crecer con menos trabas administrativas. La inversión es otro factor clave en la recuperación y crecimiento económico de España.

En CEAJE trabajamos activamente en conectar a los jóvenes empresarios con fuentes de financiación, fondos europeos y capital privado.



Fermín Albaladejo

Presidente de CEAJE España

A través de iniciativas como CEAJE HORIZON, ofrecemos acceso a capital para startups y empresas con potencial de crecimiento, facilitando la conexión con inversores y entidades financieras. No obstante, la incertidumbre regulatoria y la fiscalidad elevada siguen siendo frenos para la inversión. La inestabilidad en la legislación laboral y las cargas impositivas desincentivan la llegada de capital extranjero y la expansión de empresas nacionales.

Desde el sector privado, demandamos políticas más previsibles y una reducción de la presión fiscal para las empresas emergentes y los autónomos. El mundo empresarial está evolucionando rápidamente y España no puede quedarse atrás. Tenemos una oportunidad única para consolidar un ecosistema empresarial fuerte y competitivo. Los jóvenes empresarios somos el presente y el futuro de la economía nacional. En CEAJE, seguiremos trabajando para que la empresa sea la mejor herramienta de transformación y progreso en España.

México el ciclo entre productividad informal y recaudación.



Alfredo Ortiz Becerril

Presidente Nacional de la Comisiones de Empresarios Jovenes Coparmex



Luis Roberto Chavez C.

VP Nacional de Alianzas Internacionales de la Comisión de Empresarios Jovenes Coparmex

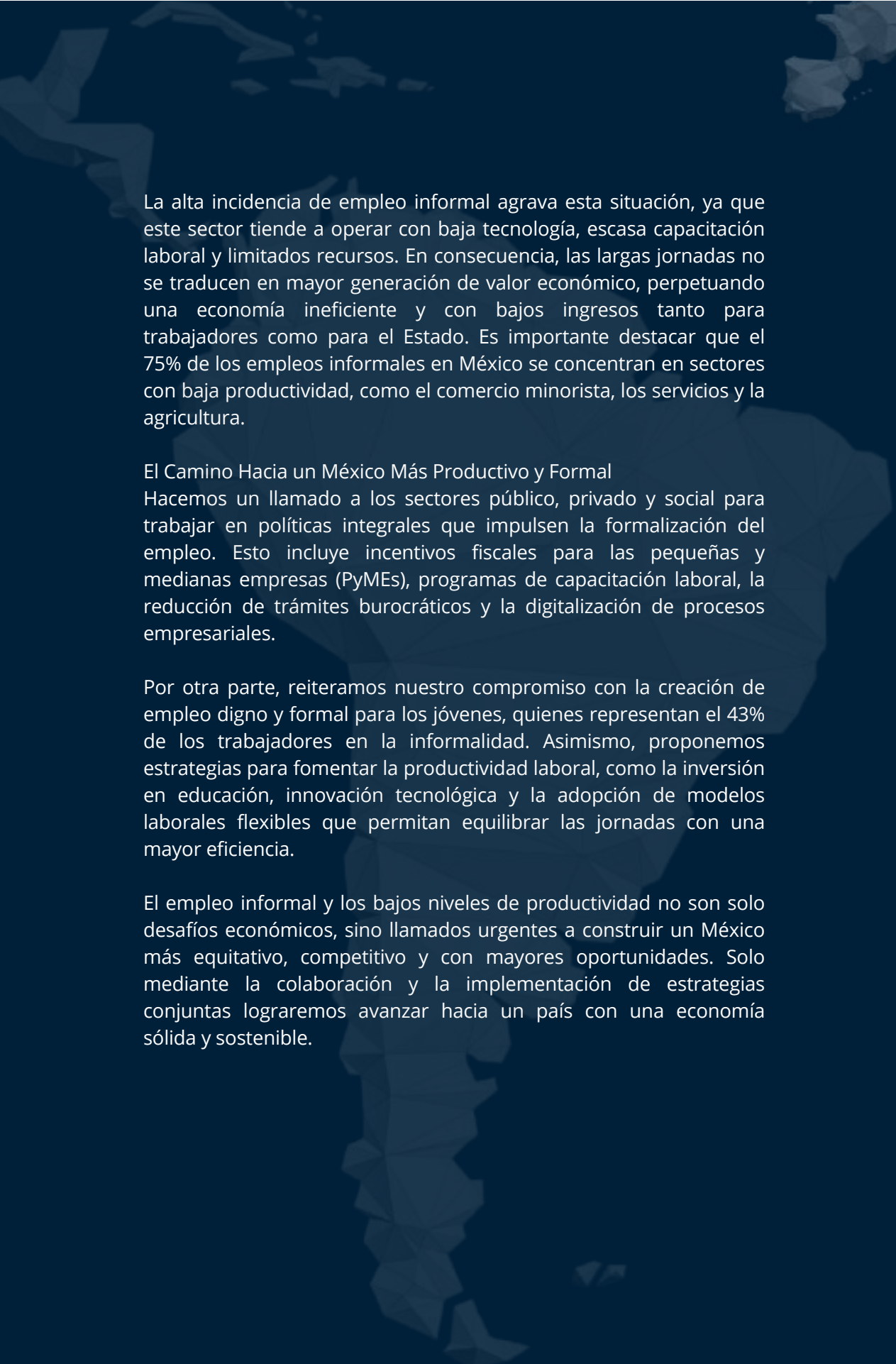
En México, el empleo informal sigue siendo uno de los principales retos para nuestra economía. De acuerdo con datos del INEGI, en el tercer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 55.1% de la población ocupada, es decir, más de **32 millones de personas** trabajan en condiciones de informalidad. Este fenómeno no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, quienes carecen de seguridad social y beneficios laborales, sino que también tiene un impacto significativo en la recaudación fiscal, limitando el crecimiento y desarrollo económico del país.

La informalidad contribuye a una brecha en los ingresos públicos. Según cifras de la OCDE, la recaudación fiscal en México equivale al **16.7% del PIB**, muy por debajo del promedio de los países miembros, que alcanza el **33.5% del PIB**.

Este déficit se debe en gran medida a que los trabajadores y empleadores en el sector informal no contribuyen al sistema fiscal, generando una pérdida estimada de más de 500 mil millones de pesos anuales en ingresos potenciales.

Productividad vs. Horas Laborales en México

Otro aspecto crítico que afecta la economía mexicana, directamente relacionado con la informalidad, es el bajo nivel de productividad laboral, a pesar de las largas jornadas laborales. Según el reporte más reciente de la OCDE, México ocupa el primer lugar entre los países miembros en horas trabajadas al año, con un promedio de 2,127 horas anuales por trabajador. Sin embargo, el país se encuentra en los últimos lugares en términos de productividad, generando apenas 23.7 dólares por hora trabajada.



La alta incidencia de empleo informal agrava esta situación, ya que este sector tiende a operar con baja tecnología, escasa capacitación laboral y limitados recursos. En consecuencia, las largas jornadas no se traducen en mayor generación de valor económico, perpetuando una economía ineficiente y con bajos ingresos tanto para trabajadores como para el Estado. Es importante destacar que el 75% de los empleos informales en México se concentran en sectores con baja productividad, como el comercio minorista, los servicios y la agricultura.

El Camino Hacia un México Más Productivo y Formal

Hacemos un llamado a los sectores público, privado y social para trabajar en políticas integrales que impulsen la formalización del empleo. Esto incluye incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), programas de capacitación laboral, la reducción de trámites burocráticos y la digitalización de procesos empresariales.

Por otra parte, reiteramos nuestro compromiso con la creación de empleo digno y formal para los jóvenes, quienes representan el 43% de los trabajadores en la informalidad. Asimismo, proponemos estrategias para fomentar la productividad laboral, como la inversión en educación, innovación tecnológica y la adopción de modelos laborales flexibles que permitan equilibrar las jornadas con una mayor eficiencia.

El empleo informal y los bajos niveles de productividad no son solo desafíos económicos, sino llamados urgentes a construir un México más equitativo, competitivo y con mayores oportunidades. Solo mediante la colaboración y la implementación de estrategias conjuntas lograremos avanzar hacia un país con una economía sólida y sostenible.



CRECIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO

Los empresarios peruanos muestran su compromiso con el crecimiento del país y añoran una pronta estabilidad política.

A pesar de que existe una evidente crisis en el sector público, desde el 2016 hasta la actualidad, en donde el estado peruano ha tenido 6 presidentes, siendo 2 de ellos elegidos democráticamente y 4 por sucesión constitucional, el sector privado mantiene una fuerte convicción sobre su rol “determinante, valiente y resiliente” frente a los embates del régimen de turno.

“Nosotros, como empresarios, asumimos nuestro rol de manera responsable. Buscamos generar empleabilidad sin considerar que podamos estar atravesando algún tipo de crisis. Hemos crecido sistemáticamente a pesar de la ralentización del PBI” dijo el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Perú (AJE Perú), Roberto Chevarria, al ser consultado sobre la realidad que afronta del sector privado.

El optimismo como premisa; Roberto Chevarria ve con buenos ojos el futuro en la economía peruana de los próximos años “Hemos inaugurado un mega puerto en Chancay a finales del 2024 y en marzo del 2025 vamos a estrenar un nuevo terminal aeroportuario, más grande, más moderno y más eficiente.” en consecuencia, “vemos años de prosperidad en nuestro territorio siempre condicionado a una gestión pública inteligente”.

Se enfatizó que un mal manejo de nuestros recursos podría “desatar un peligro financiero desatando inestabilidad política, frenar la generación de empleos y crear una mayor percepción de inseguridad ciudadana.”



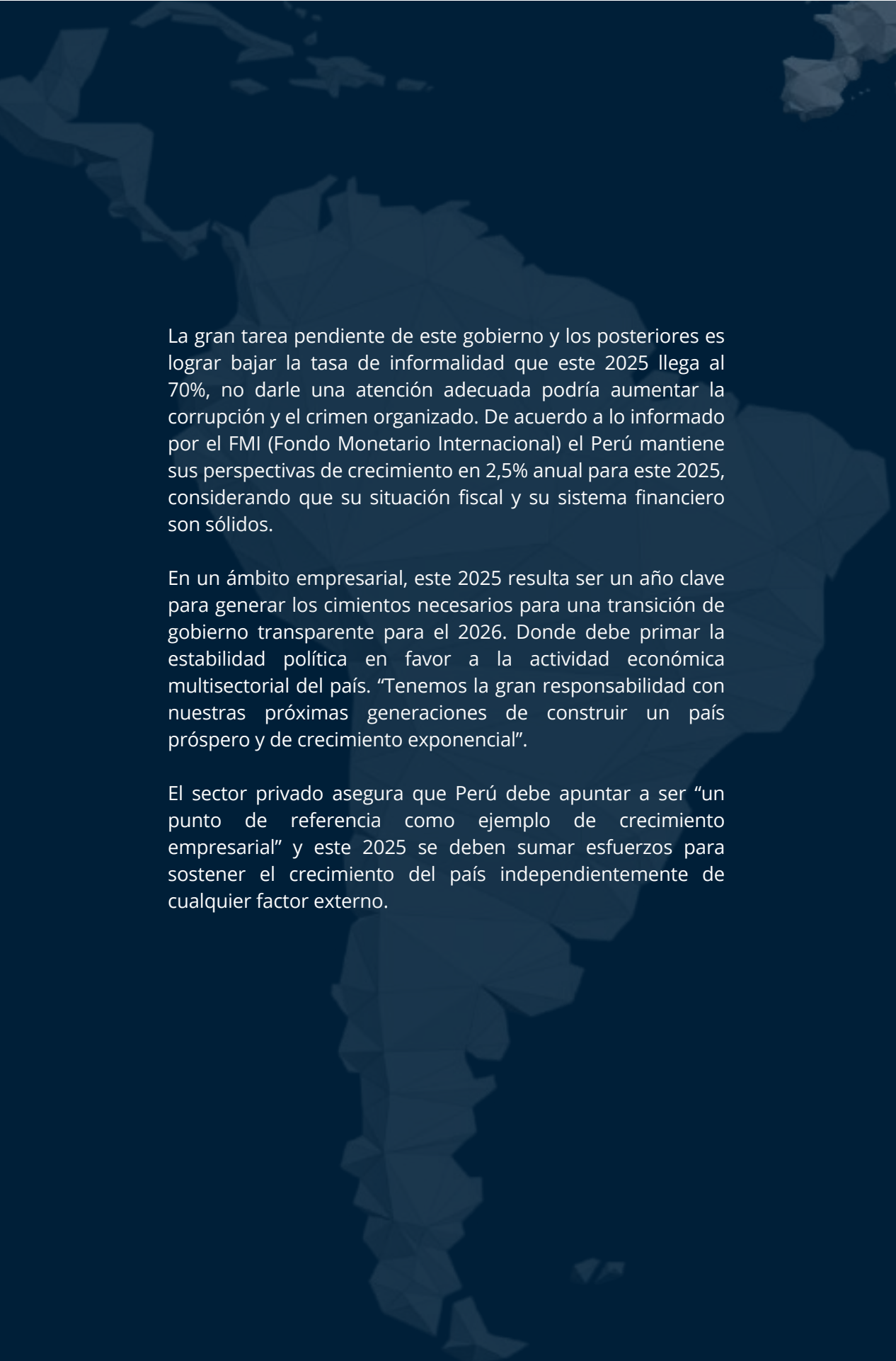
Roberto Chevarria

Presidente de AJE Perú

AJE Perú, reconocida internacionalmente por su gestión empresarial, tiene una firme posición sobre su función para el éxito empresarial del país.

Siendo una agrupación enfocada en el fortalecimiento y crecimiento del sector empresarial actúa como un agente que evita generar fricciones en el desenvolvimiento entre el estado y el privado.

En Perú, según cifras oficiales, la empleabilidad creció 0.8%, es decir que ascendió a 17 millones 159 mil personas con trabajo, un aumento de cerca de 137 mil personas más ocupadas en términos absolutos comparando los años 2023 vs 2024.



La gran tarea pendiente de este gobierno y los posteriores es lograr bajar la tasa de informalidad que este 2025 llega al 70%, no darle una atención adecuada podría aumentar la corrupción y el crimen organizado. De acuerdo a lo informado por el FMI (Fondo Monetario Internacional) el Perú mantiene sus perspectivas de crecimiento en 2,5% anual para este 2025, considerando que su situación fiscal y su sistema financiero son sólidos.

En un ámbito empresarial, este 2025 resulta ser un año clave para generar los cimientos necesarios para una transición de gobierno transparente para el 2026. Donde debe primar la estabilidad política en favor a la actividad económica multisectorial del país. “Tenemos la gran responsabilidad con nuestras próximas generaciones de construir un país próspero y de crecimiento exponencial”.

El sector privado asegura que Perú debe apuntar a ser “un punto de referencia como ejemplo de crecimiento empresarial” y este 2025 se deben sumar esfuerzos para sostener el crecimiento del país independientemente de cualquier factor externo.



Setor Privado e Futuro Económico, em Portugal.

Portugal enfrenta desafios e oportunidades que exigem um compromisso firme do setor privado na construção de um futuro mais competitivo e inovador.

O crescimento sustentável do país depende da capacidade das empresas em gerar emprego, atrair investimentos e promover um ambiente de negócios dinâmico.

Contudo, para que isso aconteça, é essencial que exista um diálogo estruturado entre empresários, governo e sociedade civil, garantindo políticas públicas que estimulem a inovação e a internacionalização.

O setor privado tem sido o motor da transformação econômica em Portugal. Ao mesmo tempo que a digitalização, a internacionalização e a aposta na sustentabilidade são pilares fundamentais que impulsionam a competitividade do país.

Nos últimos anos, empresas de diversos setores têm investido na qualificação profissional, na adoção de novas tecnologias e na criação de modelos de negócios mais sustentáveis. Estas iniciativas não só fortalecem a economia nacional como também colocam Portugal numa posição estratégica para atrair capital estrangeiro e novos talentos.

A ANJE Portugal tem defendido de forma clara que o empreendedorismo deve ser a base de um novo paradigma económico, onde o Estado cria as condições para que os negócios prosperem, mas onde cabe às empresas a maior responsabilidade de inovar e crescer.



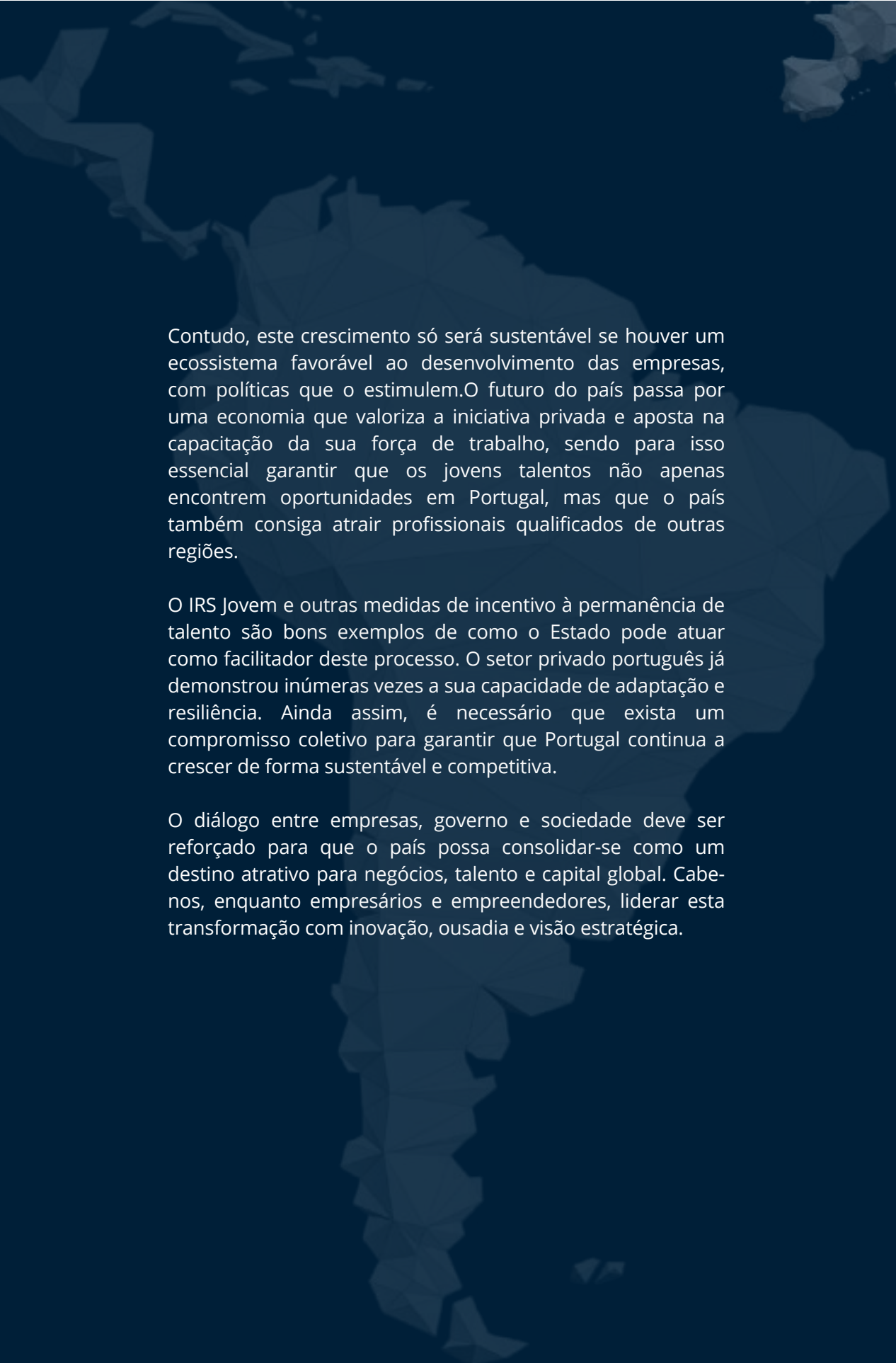
Carlos Carvalho

Presidente ANJE Portugal

É assim fundamental que as startups e as PME tenham acesso a mecanismos de financiamento ágeis e a um sistema fiscal que incentive o investimento e a criação de emprego.

O excesso de burocracia ainda é um entrave significativo ao crescimento das empresas, e essa é uma questão que precisa ser enfrentada com urgência.

Portugal tem todas as condições para se tornar um hub de inovação e empreendedorismo na Europa. A crescente aposta em setores como a inteligência artificial, as energias renováveis e a biotecnologia demonstra que há um grande potencial a ser explorado.



Contudo, este crescimento só será sustentável se houver um ecossistema favorável ao desenvolvimento das empresas, com políticas que o estimulem. O futuro do país passa por uma economia que valoriza a iniciativa privada e aposta na capacitação da sua força de trabalho, sendo para isso essencial garantir que os jovens talentos não apenas encontrem oportunidades em Portugal, mas que o país também consiga atrair profissionais qualificados de outras regiões.

O IRS Jovem e outras medidas de incentivo à permanência de talento são bons exemplos de como o Estado pode atuar como facilitador deste processo. O setor privado português já demonstrou inúmeras vezes a sua capacidade de adaptação e resiliência. Ainda assim, é necessário que exista um compromisso coletivo para garantir que Portugal continue a crescer de forma sustentável e competitiva.

O diálogo entre empresas, governo e sociedade deve ser reforçado para que o país possa consolidar-se como um destino atrativo para negócios, talento e capital global. Cabe-nos, enquanto empresários e empreendedores, liderar esta transformação com inovação, ousadia e visão estratégica.



VENEZUELA: LA RESILIENCIA COMO HERRAMIENTA DE CRECIMIENTO

Venezuela ha demostrado una capacidad de adaptación sorprendente en los últimos años, emergiendo como un país de oportunidades en medio de la crisis.

Desde el año 2019 el país ha experimentado un proceso de apertura económica derivado de la (i) flexibilización del control de cambio, (ii) flexibilización del control de precios, y (iii) dolarización transaccional de la economía, poniendo así fin a la debacle económica acaecida desde el año 2015 al 2019, que ocasionó la caída del 75% del PIB.

Así las cosas, y derivado esencialmente de la dolarización, se han facilitado las transacciones y han permitido que diversos sectores comiencen a expandirse nuevamente, derivado de la disminución de la inflación (hiperinflación) y relativo estancamiento de la devaluación de la moneda.

El impacto de estas reformas se ha reflejado en un crecimiento sostenido en áreas como el comercio, la tecnología y los servicios profesionales, impulsados igualmente por el aumento de la producción petrolera derivado del ingreso de compañías transnacionales después de año de ausencia.

A pesar de los desafíos estructurales, la economía venezolana ha mostrado signos de recuperación, impulsados por una mayor estabilidad en las transacciones y una reactivación progresiva del consumo y la inversión privada.

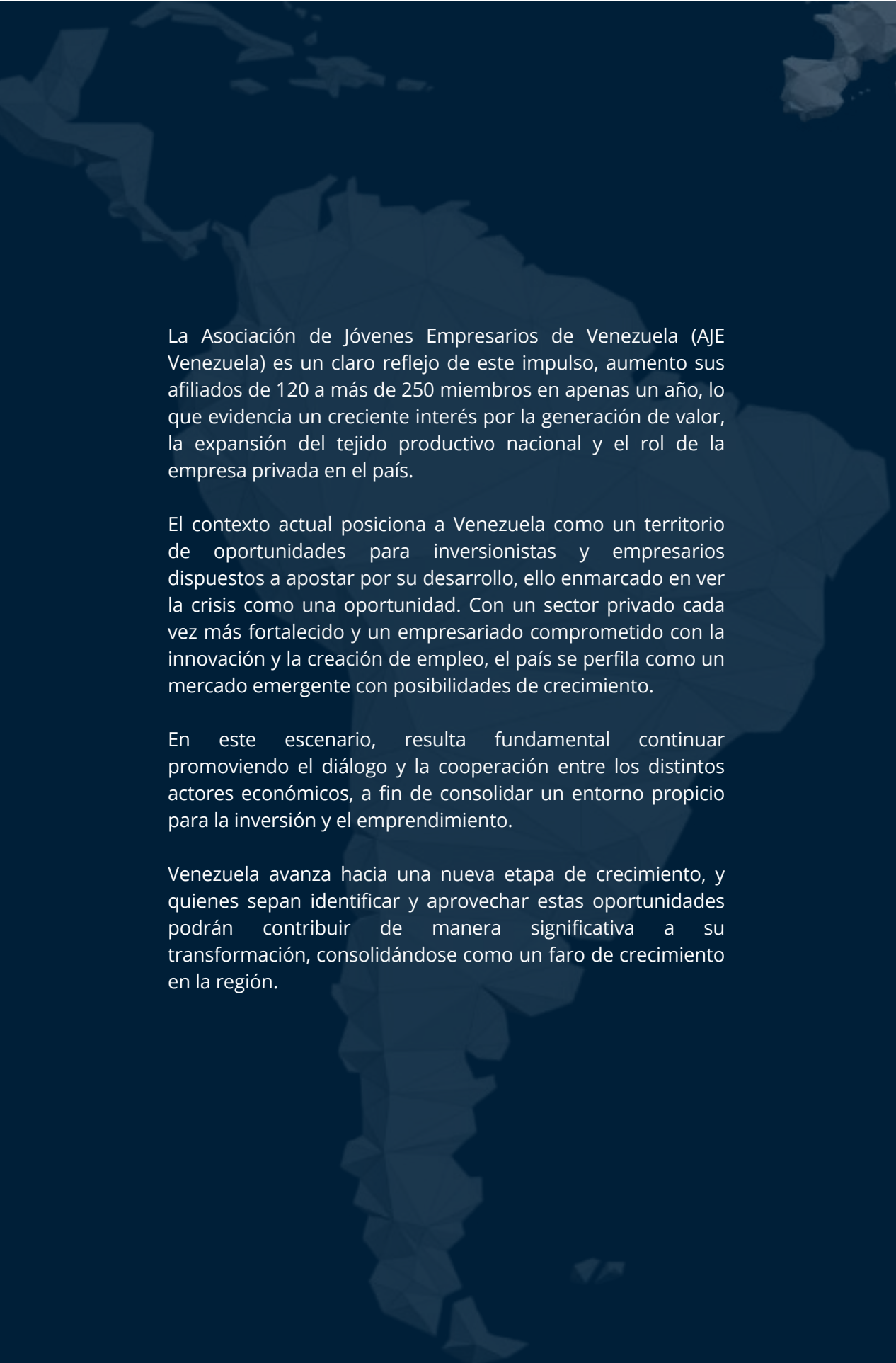


Rodrigo
Lepervanche R.
Presidente AJE Venezuela

Estos factores han permitido que el país retome su potencial -a pesar de desafíos estructurales- como un destino atractivo para el desarrollo de negocios.

Un elemento clave en este proceso ha sido el rol del joven empresariado venezolano, cuya resiliencia y capacidad de innovación han sido determinantes para el crecimiento paulatino de la economía venezolana.

Con un enfoque orientado hacia la tecnología y el aprovechamiento de herramientas digitales, esta nueva generación de emprendedores ha logrado dinamizar el ecosistema empresarial del país.



La Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela (AJE Venezuela) es un claro reflejo de este impulso, aumento sus afiliados de 120 a más de 250 miembros en apenas un año, lo que evidencia un creciente interés por la generación de valor, la expansión del tejido productivo nacional y el rol de la empresa privada en el país.

El contexto actual posiciona a Venezuela como un territorio de oportunidades para inversionistas y empresarios dispuestos a apostar por su desarrollo, ello enmarcado en ver la crisis como una oportunidad. Con un sector privado cada vez más fortalecido y un empresariado comprometido con la innovación y la creación de empleo, el país se perfila como un mercado emergente con posibilidades de crecimiento.

En este escenario, resulta fundamental continuar promoviendo el diálogo y la cooperación entre los distintos actores económicos, a fin de consolidar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento.

Venezuela avanza hacia una nueva etapa de crecimiento, y quienes sepan identificar y aprovechar estas oportunidades podrán contribuir de manera significativa a su transformación, consolidándose como un faro de crecimiento en la región.

CEIB_____

CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS
CONSELHO DE EMPRESÁRIOS IBERO-AMERICANOS